

Fernán González, S.I.  
**Colombia, una nación  
fragmentada**

*Fernán Enrique González es sacerdote jesuita, con estudios de maestría (M.A.) en Ciencia Política y de doctorado en Historia de América Latina. Ha sido profesor en varias universidades del país, así como profesor invitado de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Sus principales campos de investigación son el análisis de las relaciones entre Iglesia y Estado en la historia colombiana y el de los procesos de formación del Estado nación en Colombia y América Latina, y, más recientemente, el trasfondo histórico de las violencias en Colombia. Sus principales publicaciones son: *L'État inachevé. Las raíces de la violencia en Colombia, Para leer la Política. Ensayos de Historia Política Colombiana, y Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia*. Ha estado vinculado al CINEP, Centro de Investigación y Educación Popular, dirigido por los jesuitas colombianos, desde su fundación en 1972; desde junio de 1998 asumió la dirección general del centro.*

*Este trabajo ofrece una aproximación general a las violencias en Colombia, a partir de una información estadística y un balance de los estudios colombianos sobre el tema. Se intenta combinar el análisis estructural de largo plazo con los marcos coyunturales —diferenciados regionalmente— que sirven de escenario para la opción armada de actores de diverso espectro ideológico. Así, en el largo plazo se analizan el problema agrario y la manera en que se organizó la sociedad y el Estado colombiano desde los tiempos de la colonia española. En el medio plazo, se estudian los resultados de la violencia de los años cincuenta y de la coalición política del Frente Nacional que se diseñó como solución a lo anterior; asimismo, se analizan los cambios de la sociedad colombiana desde los años sesenta, como la rápida urbanización, el proceso de secularización acelerada y el surgimiento de nuevas capas medias urbanas. En el corto plazo, se reflexiona sobre los efectos de la penetración del narcotráfico en la economía y la sociedad, junto con las transformaciones recientes de los actores armados. Como resultado de esta combinación de procesos, se produce una notable difusión de la violencia en la sociedad colombiana, donde se hace difícil distinguir entre violencia política y no política, entre iniciativas individuales y colectivas, en el ámbito nacional y enfrentamientos regionales locales, entre conflictos públicos y privados. Finalmente, se presenta un balance provisional de la evolución de la búsqueda de salidas negociadas al conflicto.*

## ÍNDICE

1. La magnitud del problema	2
2. El análisis social de las violencias en Colombia	3
3. Hacia una mirada más compleja	6
4. El fondo del problema: la cuestión campesina	7
5. Un estilo particular de construcción del Estado	8
6. El papel de los partidos tradicionales	9
7. Las consecuencias del proceso de formación del Estado nacional	9
8. Los problemas del Frente Nacional	10
9. El influjo del narcotráfico	12
10. Las transformaciones de los actores armados	13
11. Hacia la salida negociada	14
Notas	16

A la memoria de **Iñigo Egiluz**, cooperante vasco de la ONG Hirugarren Mundua ta Bakea/Paz y Tercer Mundo, y de **Jorge Luis Mazo**, sacerdote colombiano, asesinados por fuerzas paramilitares mientras trabajaban en defensa de los derechos humanos, y de las víctimas de la violencia estructural en Colombia.

La reanudación de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el pasado 24 de octubre de 1999, pareció ofrecer un segundo aire a las esperanzas de la sociedad colombiana, empeñada en encontrar una salida al conflicto armado que la viene aquejando en los últimos cincuenta años. Pero, en esta ocasión, el clima de optimismo que había acompañado los anuncios de las anteriores conversaciones parece casi ausente, o, al menos, mucho más moderado: en menos de un año y medio fue desapareciendo la euforia de

los comienzos del gobierno de Andrés Pastrana, cuyo gesto audaz de encontrarse con el jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, *Tirofijo*, le mereció la atención de la opinión pública nacional e internacional. Y fue siendo reemplazada por un creciente escepticismo, que refleja tanto la desconfianza frente a la voluntad de paz de este grupo guerrillero como la decepción frente a la manera errática en que el gobierno ha venido manejando este proceso. Además, las denuncias de abusos, supuestos o reales, cometidos por las FARC en la zona de despeje, que el gobierno dejó bajo su control para garantizar la seguridad de sus negociadores, aumentan bastante el descontento y la desconfianza. De ahí las crecientes demandas para la existencia de una comisión de verificación, internacional o nacional, que se encargue de tramitar las respectivas quejas.

Por otra parte, el clima de recesión económica y de creciente desempleo, y la consiguiente protesta social, añade motivos al escepticismo general. Sin embargo, la reiniciación de los diálogos en La Uribe, los acercamientos al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y la creciente movilización ciudadana contra la violencia y a favor de la paz parecen abrir un cierto compás de espera a expectativas menos pesimistas, pero sin modificar del todo el escepticismo reinante.

Este escepticismo se ha venido profundizando por algunas actividades de los grupos guerrilleros, como los secuestros indiscriminados en las carreteras (las llamadas *pescas milagrosas*), que golpean a sectores medios de las ciudades, que casi no habían sentido los efectos de la guerra en carne propia, agudizando un problema ya bastante grave. El acudir a los secuestros como método de financiación de la lucha armada, considerado por la guerrilla como impuesto de guerra, ha contribuido en buena parte a la deslegitimación de la opción armada en la opinión pública colombiana.<sup>1</sup> Lo mismo que a las diversas formas de impuesto, *gramaje*, sobre la producción de narcocultivos, cuya zona tiende a coincidir con las áreas controladas por la guerrilla.

A esta deslegitimación creciente de la lucha guerrillera contribuye la tendencia a incrementar los ataques guerrilleros a poblaciones rurales en las semanas inmediatamente anteriores al comienzo de las negociaciones, que obedecen a la lógica perversa de mostrar fuerza militar antes de sentarse a negociar. Pero que, en el momento actual, se muestra contraproducente al reducir el margen de maniobra del gobierno frente a sus partidarios de derecha, que empiezan a engrosar el número de los opositores a la solución negociada.

Por otra parte, los secuestros de los pasajeros del avión Fokker de Avianca y de los feligreses de la parroquia de La María en Cali, por parte del ELN, ayudaron a enrarecer más el ambiente. Sobre todo, cuando se manifestó la voluntad de cobrar rescate por los secuestrados, lo que ocasionó un cambio en la percepción de este grupo armado, que generalmente solía tener más en cuenta la opinión pública, nacional o mundial. Al principio, se habían interpretado estas acciones como actos desesperados de este grupo para ser tenidos en cuenta por el gobierno, que había privilegiado las negociaciones con las FARC, tal vez por su mayor fuerza bélica, o quizá porque las negociaciones con el ELN se habían iniciado en el pasado gobierno de Samper, del cual se trata de mostrar distancia.

Fruto de este escepticismo y esta desconfianza ha sido la expansión de las actividades del paramilitarismo, que se ha extendido a zonas del país que antes estaban relativamente exentas del fenómeno y ha aparecido con fuerza en el mundo académico y universitario. En los últimos seis meses, el mundo académico colombiano se vio golpeado por el asesinato de tres investigadores en Ciencias Sociales, caracterizados todos por su espíritu crítico y su independencia frente a los actores armados de todo estilo. Además, el avance de estos grupos paramilitares y de autodefensa, de orientación de extrema derecha, en territorios normalmente influidos por los grupos guerrilleros, y el correspondiente contraataque de éstos, han producido un incremento de la *guerra sucia* contra

la población civil. Este aumento obedece al estilo normal de operar de todos los actores armados, que consiste en golpear a las bases sociales —reales o supuestas— del adversario, para, según ellos, “quitarle el agua al pez”.

El resultado de estos desarrollos contrastados ha sido el enorme volumen de población civil desplazada, que ha alcanzado ya la cifra de un millón y medio de colombianos en los últimos quince años (entre 1985 y 1999), que quieren escaparse del fuego cruzado entre los actores armados. Sólo en los últimos cuatro años, entre agosto de 1994 y junio de 1998, se estima en 726.000 el número de desplazados forzados: una gran proporción de ellos son parte de éxodos masivos. Se calcula que un 62% no ha podido regresar a su lugar de origen, un 55% es menor de 18 años y un 12% es menor de 15 años. Lo que significa que es un problema que afecta a la población infantil y a las madres cabezas de hogar (son viudas tres de cada cinco de ellas).<sup>2</sup>

Sin embargo, no todo es negativo en este panorama global: al lado del avance de estas tendencias guerrilleras, se empieza a consolidar la movilización ciudadana por la paz. Precisamente, la fecha del mismo 24 de octubre, escogida para reanudar los diálogos, coincidía con la señalada para desarrollar una serie de marchas ciudadanas a lo largo de todo el país para exigir a todos los actores armados el inicio inmediato de las negociaciones, el cese multilateral al fuego y el respeto a la población civil. En esta movilización ciudadana están confluyendo varios movimientos sociales, de distinto origen y diversa orientación ideológica, lo que indica cierta tendencia a la superación de la fragmentación y la falta de cohesión que hasta ahora han caracterizado estos esfuerzos de la llamada sociedad civil. Por otra parte, incluso en las negociaciones anteriores se habían logrado ya avances sustanciales, como el acuerdo sobre la agenda por discutir, la designación de la Comisión negociadora y la formación de la Comisión temática, con participación del mundo político, académico y del movimiento social por la paz.

## 1 La magnitud del problema

Este marco introductorio permite acercarnos un poco mejor a la complejidad y magnitud del fenómeno de las múltiples violencias que aquejan al país, que van mucho más allá de la relación con el problema del narcotráfico y que tocan toda la historia reciente de Colombia. Según Mauricio Rubio, a partir de 1970, la tasa de homicidios empieza a crecer aceleradamente y alcanza proporciones epidémicas a mediados de los años ochenta: en veinte años, las muertes violentas se cuadruplicaron, pero en la primera década de los noventa tendieron a disminuir levemente para empezar a repuntar a partir de 1996.<sup>3</sup> Señala Rubio que estas tasas son superiores a los actuales patrones internacionales y sólo equivalentes a los que se producen en guerras civiles declaradas: países americanos afectados por la violencia como Brasil, México, Venezuela y Estados Unidos sólo alcanzan a una fracción, entre el 15 y el 25% de las tasas colombianas. Y la relación con algunos países asiáticos o europeos es superior a cuarenta a uno, de modo que, para encontrar tasas similares en Europa, habría que remontarse hasta el siglo XVI.<sup>4</sup>

Por su parte, Saúl Franco corrobora estas tendencias: entre 1975 y 1982, observa un crecimiento lento, de 5.788 casos de homicidio a 10.679, y un crecimiento desbordado entre 1983 y 1993, cuando se pasa de 9.087 a 28.284, número que se mantiene en los dos años siguientes, para descender levemente en 1995 a 25.398. El promedio de todo el período, 1975-1995, queda en 16.056 homicidios anuales. Con respecto

a las tasas por cada 100.000 habitantes, este autor percibe la misma tendencia señalada por Rubio: un aumento lento inicial, uno acelerado para la segunda década y un pequeño descenso a partir de 1991: 24 por 100.000 en 1975 y 86 por 100.000 en 1991. Si se compara con las tasas internacionales, se observa que, entre 1990 y 1995, Colombia alcanza una tasa de 74,5 por cada 100.000 habitantes, seguido de Brasil con 17,4 (más de 4 veces menos), México con 16,8, Venezuela con 14,7 y Estados Unidos con 9. Además, si se estudia la relación con los grupos de edad, se ve que los mayores incrementos corresponden a la población masculina de entre 15 y 19 años, cuya tasa se quintuplica entre 1979 y 1994, y en el grupo entre 20 y 24, cuya tasa se cuadruplica; mientras que los grupos entre 25 y 30 años y entre 35 y 44 triplican su tasa. Lo mismo sucede con la población femenina, cuya tasa también se triplica, al pasar, entre 1979 y 1994, de 3,3 a 11 por 100.000. Además, Franco señala como fenómeno sin paralelo en el mundo el incremento de la tasa de homicidios de niños entre los 10 y 14 años, que pasa de 1,2 a 2,8 por cada 100.000.<sup>5</sup> Según un informe reciente de la Dirección de Policía Judicial, DIJIN, en 1998 se perpetraron 23.096 homicidios, un número enorme todavía, pero que significa una tendencia descendente (una tasa de 72 por cada 100.000 habitantes), que había aumentado a 26.642 en 1996, para bajar a 25.379 en 1997.<sup>6</sup>

En esta tendencia general de aumento creciente de los homicidios, destacan los relacionados con la confrontación política, que, según Franco, suponen un total de 22.617 homicidios políticos y ejecuciones extrajudiciales fuera de combate durante el período estudiado, 1975-1995.<sup>7</sup> Esto equivale a un promedio anual de 1.077 homicidios, es decir, tres homicidios diarios durante dos décadas: el peor año es 1988, con 2.738, cuando se eligen por primera vez los alcaldes por votación popular directa, lo que refleja un avance de la Unión Patriótica, se intensifica el narcoterrorismo y la represión del Estado. En términos porcentuales, se produce también un aumento lento entre 1975 y 1985, del 1,2% al 7,9%, para acelerar el crecimiento hasta alcanzar casi un 20% en 1988. Las principales víctimas de este tipo de asesinatos, para Franco, son campesinos a quienes se supone simpatizantes o apoyos de los grupos guerrilleros, dirigentes y miembros de organizaciones obreras, dirigentes cívicos, dirigentes políticos de izquierda y defensores de derechos humanos. El 50% de ellos tenía entre 18 y 39 años, y el 92% era de sexo masculino.<sup>8</sup>

Esta modalidad de violencia política alcanza su expresión límite en las llamadas *masacres*, definidas como la liquidación física, simultánea a casi simultánea, de más de cuatro personas en estado de indefensión. Estos asesinatos colectivos se han venido incrementando a partir de 1997 y, en la mayoría de los casos, obedecen a motivos políticos o de la llamada *limpieza social* contra grupos estigmatizados de la sociedad (marginales urbanos, travestis, prostitutas, pequeños delincuentes —casi siempre jóvenes—, denominados horrendamente *desechables*). Entre 1980 y 1993, este fenómeno se había localizado en el área metropolitana de Medellín (200 masacres), Magdalena Medio (124), Bogotá (60), Urabá (donde sólo Apartadó aportó el 6,4% del total nacional y el 8% de las víctimas), Meta y Boyacá. En 1996, una sola región, Antioquia, tuvo la mitad de las 110 registradas: de las 55 señaladas, un 47% fue atribuido a los paramilitares, el 15% a la guerrilla y el 7% a grupos de *limpieza social*. En la década de los ochenta, se atribuyó a grupos paramilitares un 28% de las masacres y un 17% a *escuadrones de la muerte*, mientras que un 15% se atribuyó a la guerrilla y otro tanto a las fuerzas armadas del Estado. Y en 1995, el 33% se atribuyó a paramilitares, el 29% a la guerrilla y el 8% a las fuerzas armadas del Estado.<sup>9</sup> Según los informes de la Defensoría del Pueblo, el fenómeno parece seguir en aumento, pues en 1998 se perpetraron 194 masacres.<sup>10</sup>

En este contexto de violencia generalizada, pueden observarse ciertas tendencias, según Mauricio García: la primera es el notable crecimiento de los asesinatos de carácter políti-

co en los años ochenta y su relativa estabilización, en una cota bastante elevada, en los años noventa. Esta tendencia contrasta con la segunda, la disminución significativa de detenciones políticas arbitrarias, que caracterizaron el gobierno de Turbay (1978-1982). Una tercera tendencia es el aumento significativo de la confrontación directa entre los actores armados, que se evidencia en la evolución de los muertos en combate, que crecen moderadamente en los años ochenta y aumentan considerablemente en los noventa, cuando tienden a igualarse con el nivel de los asesinatos políticos. En el último año y medio, aparece como fenómeno inédito el enfrentamiento directo entre guerrilleros y paramilitares.<sup>11</sup>

Esto se interpreta, según García, como resultado de los dos planos en que se mueve la confrontación armada en Colombia (confrontación directa entre los contendientes y guerra sucia contra los apoyos, reales o supuestos del adversario): el plano de la confrontación armada directa viene creciendo desde los años ochenta hasta hoy, lo que refleja el fortalecimiento creciente de los distintos actores armados (más frentes guerrilleros, más grupos paramilitares, más brigadas de las fuerzas armadas del Estado), que produce un mayor número de combates entre 1991 y 1996, y un aumento de los muertos en combate entre 1997 y 1998, acompañado de una disminución de las acciones bélicas. Este aumento de los combates contrasta con un descenso de atentados y sabotajes contra bienes civiles a menos de la mitad de los que ocurrían entre 1991 y 1992. Lo que permite concluir al autor que nos hallamos ante grupos cuantitativamente (y tal vez también cualitativamente) distintos de los de los años ochenta, lo que plantea la necesidad de analizar la evolución de los actores armados en la última década.

Esta evolución se refleja necesariamente en los cambios de enfoques de los analistas sociales, colombianos o extranjeros, que se han visto obligados a dedicar lo mejor de sus esfuerzos al estudio de la violencia, hasta el punto de ser declarados, a pesar de sus inútiles protestas, pioneros de una nueva rama de las Ciencias Sociales: la *Violentología*.

## 2 El análisis social de las violencias en Colombia

La importancia del tema de las violencias en Colombia ha hecho que sea un objeto privilegiado de la atención de los científicos sociales, aunque no deja de llamar hoy la atención el contraste actual entre cierto relativo estancamiento de los estudios generales sobre la violencia en Colombia, el aparente agotamiento de los paradigmas de explicación general del fenómeno y la creciente expansión del control territorial de actores paraestatales, sean guerrilleros o paramilitares. Ante este contraste, muchos se preguntan si no será que el fenómeno está ya sobrediagnosticado, mientras que otros anotan que los estudios apenas empiezan a desbrozar el problema. Otros se interrogan sobre la posibilidad de una interpretación global de la violencia y abogan por estudios más desagregados de carácter regional, al estilo de los de Adolfo Aterhortúa en Trujillo<sup>12</sup> y María Victoria Uribe en Urabá.<sup>13</sup> Algunos, como Alfredo Rangel<sup>14</sup> y Jesús Antonio Bejarano,<sup>15</sup> cuestionan el desinterés con que el conjunto de la sociedad colombiana mira el problema. Para otros, la preocupación se centra en que el conocimiento acumulado sobre el tema no parece reflejarse en las acciones del Estado y la sociedad: como señala el mismo Bejarano, pareciera presentarse un divorcio entre los estudios sobre las violencias y las búsquedas teóricas de solución de conflictos.

Sin embargo, se pueden encontrar referencias comunes en la globalidad de los estudios, tales como la precariedad de la presencia del Estado —aunque entendida de diversas formas—, la carencia de un ámbito público de resolución de conflictos como contraste a la tendencia a la solución privada de ellos, la rutinización o banalización del fenómeno, la multiplicidad de formas que oculta, su relación con redes locales y regionales de poder, la inexistencia de una relación causal directa entre pobreza y violencias, la frontera difusa entre violencia política y no política, incluida la delincuencia, etc.

Por otra parte, los estudios sobre la violencia varían según su explicación se centre en el Estado o en la sociedad: para unos, la violencia, sea política o social, tiene que ver con la negación del Estado para reconocer la pluralidad.<sup>16</sup> Para otros, la violencia tiene que ver más bien con una sociedad que no se reconoce en el Estado, ni lo acepta como tercero en discordia para dirimir sus conflictos, ni se muestra capaz de convivir con la diferencia. Por ejemplo, Daniel Pecaut<sup>17</sup> sostiene que la violencia tiene que ver menos con los abusos de un Estado omnipotente que con los espacios vacíos que el Estado deja en la sociedad, que queda librado a su propia dinámica de fuerzas contrapuestas.

## **L**a Comisión de Estudios sobre la Violencia insiste en que las violencias que nos están matando no son tanto las del monte como las de la calle, relacionadas con la pobreza absoluta y la desigualdad social, que se expresan en formas extremas de resolver conflictos

La tradición de los estudios de la violencia colombiana se inicia en 1962 con el estudio pionero de la Comisión compuesta por monseñor Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna,<sup>18</sup> que rompe con la tendencia de los trabajos polémicos, escritos por personas vinculadas a los bandos en pugna, muchos de ellos en forma novelada. Esta comisión intenta hacer una geografía e historia de la violencia, introduciendo variaciones regionales y remontándose a los antecedentes de los años treinta. Además, trata de analizar aspectos más estructurales como la conformación de los grupos armados, la semblanza de sus principales jefes, sus tácticas y modos de financiación, sus manifestaciones culturales y la quiebra de las instituciones fundamentales. Luego se acerca a una lectura sociológica, señalando sus consecuencias materiales, los factores sociojurídicos de la impunidad y la relación entre el conflicto y la estructura social del país. Como señala Carlos Miguel Ortiz en su balance historiográfico,<sup>19</sup> este estudio se distancia de la lectura tradicional, porque no considera al pueblo como una masa bárbara manipulada sino como un protagonista activo del proceso. Pero otros han señalado la ausencia de una reflexión profunda sobre el papel del Estado y del funcionamiento del sistema bipartidista en este análisis.

En cambio, la pregunta por el Estado será clave en la reflexión de los científicos políticos, casi todos norteamericanos, como Vernon Fluharty,<sup>20</sup> Robert Dix,<sup>21</sup> Ramsey Russell,<sup>22</sup> Richard Weinert,<sup>23</sup> William Payne,<sup>24</sup> Robert Williamson<sup>25</sup> y, sobre todo, Paul Oquist.<sup>26</sup> Oquist rompe con las variables normalmente usadas, como el contraste entre tradición y modernidad, y afirma que la violencia supuso un derrumbe parcial del Estado colombiano (tal vez sobrestimando la solidez y coherencia previas de éste). El énfasis en las clases sociales, especialmente en las de las luchas campesinas, presente en Oquist, será central en Pierre Gilhodés<sup>27</sup> (que hablará de la violencia como una rebelión campesina frustrada) y en Eric Hobsbawm,<sup>28</sup> que se referirá a los guerrilleros colombianos como rebeldes primitivos.

Estos problemas fueron retomados por muchos académicos colombianos y extranjeros como objeto de sus tesis de grado u otros estudios, que subrayan la importancia de la diferenciación regional. Con el riesgo de omitir algunos nombres, recuerdo los notables libros de James Henderson (Tolima),<sup>29</sup> Carlos Miguel Ortiz (Quindío),<sup>30</sup> Jaime Arocha (Quindío),<sup>31</sup> Roberto Pineda Giraldo (El Líbano),<sup>32</sup> Gonzalo Sánchez y Donny Meertens (sobre el bandolerismo social)<sup>33</sup> y Darío Fajardo (Tolima).<sup>34</sup> Muchos de los resultados y conclusiones de estos trabajos han sido reelaborados y reinterpretados por Gonzalo Sánchez en su balance de estudios sobre la violencia y los capítulos sobre la violencia en la *Nueva Historia* de Planeta Colombiana.<sup>35</sup> Esta síntesis de Sánchez combina la visión de conjunto desde la nación con la mirada sobre lo regional, y muestra el fracaso de las reformas del Frente Nacional en relación con las zonas violentas, como preparación de la fase posterior de la violencia.

Otro balance importante se realizó en 1984, en el primer simposio sobre la violencia colombiana, que mostró ya una relativa madurez de los estudios sobre el tema, lo mismo que un énfasis en la relación entre conflictos violentos y estructuras agrarias, diferenciadas regionalmente: por ejemplo, los trabajos de Katherine Legrand,<sup>36</sup> el artículo excelente de Medófilo Medina sobre el sur del Tolima,<sup>37</sup> y el capítulo de Carlos Miguel Ortiz sobre el Quindío.<sup>38</sup> También se destacó allí el estudio de Herbert Braun sobre el Bogotazo<sup>39</sup> y la visión retrospectiva de monseñor Guzmán sobre su propia obra, veinte años después. Pero tal vez uno de los mejores intentos de síntesis de este período es el de Daniel Pecaut en varios libros y artículos, particularmente *Orden y violencia*,<sup>40</sup> que enmarca el fenómeno de la violencia dentro de un esclarecedor estudio de la coyuntura política de los años treinta a cincuenta, cuya interpretación se centra en la disociación entre lo social y lo político. Este libro ha sido enriquecido por varios artículos del autor sobre el tema, hasta el día de hoy.

Un cuarto momento de este balance está señalado por la creación de la Comisión de Estudios sobre la Violencia, que realizó un nuevo análisis del fenómeno entre marzo y mayo de 1987, que dio lugar a la mal llamada violentología, nombre que rechazan unánimemente todos los participantes en dicha comisión. La Comisión significó una importante ruptura con el sobredimensionamiento que se daba a la violencia política, al señalar el carácter multidimensional de las violencias y la necesidad de una lectura más plural del fenómeno.<sup>41</sup> Hay que diferenciar entre violencia política, socioeconómica, sociocultural y territorial, reforzadas todas por cierta cultura de la violencia. La Comisión insistía en que las violencias que nos están matando no son tanto las del monte (solo 7,5% en 1985) como las de la calle, relacionadas con la pobreza absoluta y la desigualdad social, que se expresan en formas extremas de resolver conflictos. Estas violencias están más relacionadas con la calidad de vida y las relaciones sociales que con la lucha por lograr el acceso al control del Estado.

Sin embargo, la solución que presentan sigue centrada en el Estado: la democracia necesita que el Estado reconozca la pluralidad de la sociedad en lo étnico, lo social y lo político. Pero también señala que la impunidad en la violación de los derechos humanos no sólo se debe a deficiencias en los aparatos policiales y judiciales, sino también a nuestra historia de desigualdades económicas y sociales, al acceso diferenciado a los bienes materiales y a los obstáculos a la realización de los colombianos como ciudadanos y como miembros de la sociedad.

Además, la Comisión señala las particularidades de la violencia política contrastando las guerras civiles del siglo XIX, la violencia de los años cincuenta y la actual. Las guerras civiles del siglo pasado reflejaban principalmente los enfrentamientos entre las elites, mientras que la violencia de los años cincuenta estaba encabezada por líderes populares, al producirse un desfase entre la dirección ideológica y la conducción militar. Esto produjo expresiones anárquicas, desestabilización de los poderes y marcada fragmentación de

la sociedad. Se señala que la violencia de los sesenta y setenta es de naturaleza diferente de la de los conflictos anteriores, pues los actores armados de estas décadas no buscan insertarse en el poder ya constituido sino destruir y sustituir el existente. En esta nueva etapa, la revolución cubana sirve de detonante con la teoría del *foco*, pero los nuevos rebeldes encuentran terreno abonado en la persistencia de grupos de la violencia anterior, no plenamente insertos en el Frente Nacional, cuyo carácter de democracia restringida y su delegación del manejo del orden público a manos exclusivamente militares sirve de caldo de cultivo de las nuevas guerrillas. Señala la Comisión la evolución de los movimientos guerrilleros desde su surgimiento y relativa consolidación, con sus reflujos y problemas, pasando por la segunda generación (a finales de los setenta), cuando se presenta una nueva politización de la guerrilla, para concluir con el momento en que se escribió el informe (1987). El momento de entonces se caracteriza por la coexistencia con el narcotráfico y la violencia difusa —a veces indistinguible de la violencia política—, que insertan la lucha armada en un nuevo contexto de expansión y refinanciación autónomas, que conduce a una total autonomía frente a los factores externos. Pero esta inserción, sostiene el informe, no produce una crisis insurreccional sino una anarquización generalizada de la vida social y política.

Los estudios de la Comisión dieron lugar a una nueva línea de estudios, que se reflejó en una serie de congresos y simposios sobre el tema, como los realizados en Chiquinquirá, que mostraron una proliferación de enfoques. Además, también aparecieron otros libros, algunos de ellos tesis de maestría, como las de Javier Guerrero (violencia en Boyacá en los años treinta),<sup>42</sup> Elsy Marulanda (colonización del Sumapaz en los años veinte y treinta),<sup>43</sup> Darío Betancur (sobre los pájaros, asesinos políticos, del valle del Cauca),<sup>44</sup> Reinaldo Barbosa (Llanos orientales), Carlos Medina (sobre el paramilitarismo en Puerto Boyacá<sup>45</sup> y la historia del ELN<sup>46</sup>). En esta línea, habría que destacar el notable estudio de Mery Roldán sobre la violencia en Antioquia<sup>47</sup> y los trabajos del INER en la Universidad de Antioquia, centrados sobre todo en Urabá (María Teresa Uribe y Clara Inés García, etc.)<sup>48</sup> y el Bajo Cauca antioqueño. La violencia urbana fue objeto principal de los esfuerzos de la Universidad del Valle, con los trabajos de Álvaro Camacho, Álvaro Guzmán<sup>49</sup> y otros, pero también en Antioquia se presentó un interesante acercamiento al problema de la violencia urbana, particularmente la juvenil, por parte de la Universidad de Antioquia y la Corporación REGIÓN (Alonso Salazar,<sup>50</sup> Ana María Jaramillo,<sup>51</sup> Gloria Naranjo,<sup>52</sup> Marta Villa<sup>53</sup> y otros).

Muchos de estos esfuerzos fueron recogidos por el conjunto de investigaciones realizadas por el CINEP (Centro de Investigación y Educación Popular) entre 1988 y 1992, que trataban de combinar el enfoque estructural e histórico, de largo plazo, con estudios coyunturales de regiones particularmente violentas como el Magdalena Medio Santandereano (Alejo Vargas),<sup>54</sup> la zona esmeraldífera de Boyacá (María Victoria Uribe),<sup>55</sup> la zona del Sumapaz (José Jairo González),<sup>56</sup> el Bajo Cauca antioqueño (Clara Inés García)<sup>57</sup> y la ciudad de Medellín (Alonso Salazar y Ana María Jaramillo).<sup>58</sup> El enfoque histórico-estructural se refleja en los estudios de Consuelo Corredor sobre modernización económica y modernidad,<sup>59</sup> los estudios de Fabio Zambrano y Fernán González sobre los trasfondos históricos de la violencia,<sup>60</sup> el libro de Fabio López de la Roche sobre la cultura de la izquierda,<sup>61</sup> el trabajo de Elsa María Blair sobre las fuerzas armadas<sup>62</sup> y el libro de Mauricio García<sup>63</sup> sobre las políticas de paz hasta Tlaxcala.

La idea central que guiaba este conjunto de las investigaciones del CINEP era que las violencias recientes deberían analizarse en el contexto de la historia del país, particularmente a la luz de la específica configuración del Estado y la sociedad colombianos, teniendo siempre en cuenta la dimensión espacial y las modalidades concretas tanto de la ocupación de los territorios como de las formas de cohesión social

que en ellos se generan. Y la manera como se articulan los poderes locales de esos territorios con el Estado nacional a través de los partidos políticos y los imaginarios de pertenencia o identidad que acompañan esta articulación. Como resultado de esos complejos procesos sociales, económicos, políticos y culturales, se explica la inexistencia de un espacio público de resolución de conflictos como la otra cara de la proclividad a la solución privada y violenta de los problemas.

Habría que señalar que esta línea de análisis ha sido prolongada por algunos de estos investigadores en trabajos posteriores: es el caso de algunos trabajos de María Victoria Uribe y José Jairo González, anteriormente mencionados.<sup>64</sup> Una línea análoga, con algunas diferencias, la constituye el excelente trabajo de Adolfo Atehortúa sobre Trujillo,<sup>65</sup> que señala las continuidades y rupturas de la violencia en un largo plazo, que arranca desde la primera colonización y el poblamiento, pasa por la violencia partidista hasta llegar al actual momento, cuando aparecen confrontados guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.

## Las violencias recientes deberían analizarse en el contexto de la historia del país, particularmente a la luz de la específica configuración del Estado y la sociedad colombianos

Con respecto a la relación entre violencia y derecho, habría que tener en cuenta los trabajos de Iván Orozco sobre combatientes, rebeldes y territorios,<sup>66</sup> junto con la aproximación de Germán Palacio al concepto de paraestado.<sup>67</sup> También habría que recordar los análisis de Gabriel Gómez y Rodrigo Uprimny sobre las relaciones entre justicia y violencia. Precisamente, la diferenciación entre delincuente político y común ha sido objeto de una dura crítica por parte de Mauricio Rubio.<sup>68</sup> Según él, la evidencia empírica contradice las dos premisas de los partidarios de una salida negociada al conflicto, que conciben a los insurgentes como *bandidos sociales que actúan como actores colectivos*, determinados por condiciones estructurales objetivas y opuestos a los organismos del Estado, instrumentos esenciales de los grupos dominantes. Así, la realidad encontrada no muestra a los actores armados como modernos Robin Hood, con motivaciones altruistas, amplio respaldo popular, una honda adhesión política, una acentuada movilidad y cierto carácter *telúrico* (una relación cercana con un territorio y una población determinada), sino con conductas muy semejantes a las del delincuente común. Señala que el apoyo económico del campesino a las guerrillas dista de ser voluntario, las relaciones amigables con las comunidades campesinas son escasas, el manejo clientelista de los recursos públicos por parte de la guerrilla no se diferencia del de los políticos tradicionales sino por su carácter armado.<sup>69</sup> Peor aún, el recurso al secuestro o al impuesto sobre el narcocultivo hacen bastante irreal la distinción entre delincuentes comunes y políticos. Rubio señala la necesidad de combinar los análisis basados en la teoría de la *escogencia natural de los individuos*, que responden a intereses individuales, con la visión sociológica del mundo, que respondería a las llamadas causas objetivas de la violencia. Esta combinación se vería reforzada por la evidencia empírica que muestra claramente cómo el delito común y el delito político —que se financia con el primero— se complementan y refuerzan mutuamente.<sup>70</sup>

Para acercarse al tema de las relaciones de la violencia con el narcocultivo, hay que tener en cuenta el trabajo de Jaime Eduardo Jaramillo, Fernando Cubides y Leonidas Mora,<sup>71</sup> que muestran las interrelaciones entre colonización campesina, coca y guerrilla, así como los trabajos del CINEP, realizados por Ricardo Vargas y Jackeline Barragán. Es interesante señalar la manera en que Francisco Thoumi<sup>72</sup> relaciona los

problemas de la violencia y el narcotráfico con el estilo de desarrollo del Estado colombiano y su crisis de legitimidad. Sobre las relaciones entre problema agrario y violencia, del narcotráfico o no, se pueden consultar también los análisis de Alejandro Reyes Posada. También se pueden consultar los trabajos de José Jairo González sobre la Amazonia.<sup>73</sup>

Sobre el desarrollo de la guerrilla, hay que destacar los esfuerzos de Eduardo Pizarro para la historia del origen de las FARC<sup>74</sup> y sobre su carácter insurgente que no conduce a la revolución.<sup>75</sup> En ese sentido, también el libro de José Jairo González, antes citado, sobre las repúblicas independientes en el Sumapaz arroja luces sobre el origen de las FARC. Es interesante asimismo el estudio antropológico, que mencionábamos inicialmente, de María Victoria Uribe sobre el regreso del EPL (Ejército Popular de Liberación) a la vida civil, con una marcada insistencia en la subcultura guerrillera, la mentalidad y el origen de los combatientes, sus motivaciones para la lucha, sus vivencias de desarraigo y reinserción. En ese sentido son útiles los libros de Arturo Alape sobre Tirofijo,<sup>76</sup> los relatos de Alfredo Molano sobre personajes ligados a la violencia,<sup>77</sup> los libros de Darío Villamizar sobre el M-19<sup>78</sup> y las narraciones de algunos antiguos militantes sobre algunas de sus respectivas organizaciones: por ejemplo, los trabajos de Álvaro Villarraga y Nelson Plazas,<sup>79</sup> y Fabiola Calvo<sup>80</sup> sobre el EPL.

Más recientemente, han surgido algunos estudios más o menos críticos de los trabajos realizados sobre la violencia, que piden mayor rigor teórico y más respaldo empírico señalando cierto facilismo de algunos análisis que se lanzan a ser especulaciones deductivas sin mucha base en los hechos. Algunos intentos de buscar datos estadísticos para ir creando series periódicas, como los trabajos de Camilo Echandía y Fernando Gaitán, han sido importantes. Lo mismo que ciertas precisiones teóricas e históricas, y contrastaciones factuales contra algunas afirmaciones un tanto superficiales, hechas por el mismo Fernando Gaitán, Malcolm Deas y Jesús Alberto Bejarano, ayudan a clarificar el tema.

Sin embargo, curiosamente estos autores no se distancian tanto como creen de aquellos a quienes critican. Así, Malcolm Deas<sup>81</sup> hace un recorrido por la historia colombiana para mostrar que Colombia no siempre ha sido tan violenta como lo es ahora y que es realmente poco lo que sabemos sobre el tema. Además, reivindica el carácter esencialmente político de la violencia política, que considera irreductible a otras categorías económicas, sociales y culturales. Y subraya algo que generalmente se pasa por alto: se trata de una violencia política que busca el poder en los lugares donde el Estado apenas sí puede reclamar el monopolio de la fuerza, por lo que la lucha no se da siempre contra el Estado sino contra otros rivales. Esta afirmación está reforzada por la idea de poca deferencia de la población frente a la autoridad y de debilidad de las instituciones. Ambas ideas están muy relacionadas con los enfoques centrados en la llamada precariedad del Estado.

Por su parte, Fernando Gaitán Daza<sup>82</sup> hace un recorrido por las diferentes teorías internacionales y nacionales sobre la violencia colombiana, señalando las incongruencias de algunas de ellas con la información factual e intentando construir una importante serie estadística sobre la violencia. Finalmente concluye que los colombianos no somos esencialmente violentos sino que el tipo de instituciones políticas y judiciales, junto con la organización política del país, facilita la violencia: la referencia a los quiebres institucionales producidos con los cambios de gobierno lo acerca a Oquist y Hartlyn.<sup>83</sup> La insistencia en la necesidad de combinar los análisis de las condiciones regionales y locales de áreas de conflicto con el análisis de la crisis nacional, lo acerca bastante al enfoque de los trabajos del CINEP. Particularmente valiosa es la aportación de Gaitán para descartar la fácil asociación directa que se suele hacer entre pobreza y violencia y apuntar hacia la dirección más correcta, que sería asociar la violencia al aumento rápido y desigual de la riqueza en determinadas áreas, donde es visible el contraste entre pobres y

nuevos ricos, y escaso el control estatal. Este enfoque, cercano al de Bejarano, no se distancia tampoco del enfoque relativo al tipo de presencia de las autoridades estatales en el nivel local. También son útiles las recomendaciones de Gaitán sobre la necesidad de profundizar en el análisis sociológico, antropológico y psicológico de los grupos guerrilleros y paramilitares, de los funcionarios de justicia, miembros de la fuerza pública y de personas involucradas en el narcotráfico.

La idea de la relación entre nueva riqueza y violencia es central en los trabajos de Jesús Antonio Bejarano:<sup>84</sup> según él, la causa de la violencia no es ni la pobreza en sí misma (la violencia aumenta con la riqueza) ni la ausencia del Estado en sí misma, sino la rápida expansión económica de ciertas regiones, que va más allá de la capacidad del Estado para hacer presencia en ellas. Esto reflejaría la pérdida del monopolio de la coerción legítima del Estado y la incapacidad de la sociedad y de las instituciones judiciales para solucionar civilizadamente los conflictos. Estos planteamientos son bastante cercanos a los acercamientos en torno a la precariedad del Estado y a la inexistencia de un espacio público de resolución de conflictos, que ponen el problema tanto en el Estado como en la sociedad.

También son importantes las precisiones de Bejarano en torno a la evolución del movimiento guerrillero, ya que muchos de los análisis se quedan en el momento fundacional de los grupos rebeldes y prescinden de su posterior evolución. Así, señala que los movimientos guerrilleros ya no se concentran exclusivamente en las zonas de colonización más o menos marginal donde se originaron, sino que se han venido expandiendo hacia zonas más ricas, dedicadas a la agricultura comercial, ganadería, explotación petrolera o aurífera, y a zonas fronterizas o costeras, que les permiten acceder a recursos del contrabando. Por lo demás, este cambio de áreas hace que la guerrilla sea menos societaria, menos ligada a las bases sociales y más militarista. Así, las guerrillas de las FARC buscan hoy apoyarse en los sectores no asimilados en las economías del oro, petróleo, banano, palma africana, coca y amapola, donde se produce un rápido crecimiento económico, sin renunciar a la presencia en las tradicionales zonas de colonización periférica.

En resumen, este rápido balance permite comprender tanto los avances como los vacíos de los estudios sobre violencia: se tiene un panorama complejo sobre la violencia de los años cincuenta y se conoce bastante el momento original de las guerrillas de los setenta, pero hay vacíos notables sobre su desarrollo ulterior en los años ochenta y noventa, aunque ya se han producido algunos avances. Haría falta profundizar en los cambios recientes de los actores armados tanto en su naturaleza como en sus áreas de presencia y en el hincapié que algunos hacen en la opción voluntaria y estratégica que los actores armados hacen por la violencia,<sup>85</sup> lo que no desconoce las condiciones estructurales y coyunturales donde se hace esta opción. Hace falta profundizar en temas como la precariedad del Estado y la fragmentación de poder en los niveles local, regional y nacional; la relación no directa entre pobreza y violencia; la caracterización del régimen político como cerrado o abierto; la capacidad de la representación política de lo social; la etnografía y cultura de los grupos armados; y el papel y sentido de la sociedad civil en estos procesos.

### Hacia una mirada más compleja

Este análisis de la evolución de las miradas de los científicos sociales en su reflexión sobre las violencias colombianas, nos

ha hecho pensar en la necesidad de reformular y precisar algunos de los estudios que habíamos hecho en el CINEP, de manera que podamos retomar los elementos centrales de nuestras explicaciones pero modificándolos según los avances registrados en los años recientes y la evolución de la propia dinámica de los actores armados, que registra diferencias notables con respecto a la lógica de sus inicios. Así, las presentes reflexiones buscan retomar la investigación interdisciplinaria realizada por el equipo Conflicto Social y Violencia del CINEP, antes mencionada, pero tratando de releerla desde los desarrollos posteriores de la discusión y tomando en cuenta algunas de las críticas antes señaladas. Se busca así retomar una mirada de largo plazo sobre los procesos históricos que van construyendo los escenarios estructurales como condiciones de posibilidad de las opciones violentas de determinados actores individuales y colectivos, para pasar luego a tratar de señalar ciertos momentos coyunturales que sirven de elementos catalizadores y desencadenantes de esas opciones, que no se leen como resultados mecánicos de esos marcos estructurales y coyunturales sino como producto de la voluntad política de ciertos actores sociales que concluyen que la violencia es el único instrumento para transformar las estructuras de la sociedad. En ese sentido, la opción voluntarista y mesiánica de grupos de carácter jacobino se encuentra con algunos movimientos sociales que surgen de las contradicciones profundas de la sociedad colombiana. Pero hace falta estudiar mejor las relaciones de las opciones de los individuos que conforman estos grupos con las condiciones de tipo estructural y coyuntural que las enmarcan: cómo construyen estos individuos su "imagen de enemigo"<sup>86</sup> y las solidaridades con otros actores que los constituyen en actores sociales.

La combinación de estas condiciones estructurales e históricas de posibilidad y estos factores coyunturales desencadenantes con las opciones voluntarias de individuos y grupos sociales debe analizarse en los niveles macro, medio y micro de la sociedad y del Estado. De la misma forma, las propuestas de solución deben apuntar a estos diversos niveles, lo mismo que a elementos tanto estructurales como coyunturales, sin dejar de lado los ámbitos personales y las solidaridades de grupo. Este marco general debe permitir la comprensión de las diversas lógicas de los polos opuestos para superar la contraposición de imágenes y contraímagenes, que producen la exclusión, la criminalización y la demonización del otro. Cada uno de los contrincantes en una lucha violenta tiene razones subjetivas y objetivas, que, *a su modo de ver*, justifican su opción, desde una utopía de orden soñado, a partir de una concepción totalizante de la realidad, como ha señalado varias veces Estanislao Zuleta.<sup>87</sup>

En esta línea, los aspectos centrales de coincidencia del proceso de nuestra investigación interdisciplinaria señalan que el conjunto de violencias en Colombia tiene que ver con varios trasfondos en el largo plazo, que deben confrontarse con procesos sociales desencadenados a partir de los años sesenta hasta desembocar en la coyuntura de corto plazo. Así, en el largo plazo habría que tener en cuenta que:

- La manera en que se pobló el país y se organizó la estructura económica y social, desde los tiempos de la colonia española, creó las bases de un problema agrario, que hasta el día de hoy permanece sin solución.
- La permanencia de este problema campesino obedece, en buena parte, al modo como se construyó el Estado colombiano, a partir de la configuración política de la colonia, y la manera en que fracasaron, al menos en parte, los diversos intentos de crear un Estado de carácter moderno. Esta incapacidad se manifiesta en la dificultad para construir estructuras políticas que permitan expresar los cambios recientes de la sociedad colombiana y los problemas sempiternos del mundo campesino, sobre todo de las zonas de colonización marginal.

Asimismo, hay que considerar varios procesos de mediano plazo, como los problemas resultantes de la violencia de los años cincuenta; la manera como se organizó el sistema del Frente Nacional, que hacía difícil la expresión política de tensiones y grupos sociales que no pasaran por los canales de los partidos tradicionales, liberalismo y conservatismo; y la rápida urbanización de la población colombiana y la migración aluvional de campesinos a las ciudades, que sobrepasaron la capacidad del Estado para proporcionar servicios públicos adecuados a la creciente población urbana y la posibilidad de la industria nacional para absorber esa mano de obra en aumento. Además, a partir de los años sesenta, se produce una rápida apertura del país a las corrientes del pensamiento mundial, un acelerado proceso de secularización de las capas medias y altas, un aumento de la cobertura educativa, el surgimiento de nuevas capas medias, una transformación del papel social de la mujer, que sobrepasan los marcos institucionales y las referencias culturales que tenía el país para canalizar y dar sentido a los procesos sociales.

Por otra parte, hay que tener también en cuenta procesos desarrollados en el corto plazo, como la penetración del narcotráfico en la economía y la sociedad colombianas, las transformaciones de los movimientos guerrilleros al operar en nuevas circunstancias y territorios distintos de los originales, el surgimiento y auge de grupos paramilitares y de autodefensa de derecha, y la creciente deslegitimación del régimen político.

## 4 El fondo del problema: la cuestión campesina

La estructura de la propiedad de la tierra, producto del desarrollo del sistema colonial de encomiendas y haciendas,<sup>88</sup> junto con el sistema de castas que regulaba la sociedad colonial, produjo una gran concentración de las tierras en torno a las ciudades y una población mestiza sin lugar definido en la jerarquía social.<sup>89</sup> La combinación de estos desarrollos dio lugar a un rasgo que va a caracterizar la historia colombiana desde entonces hasta nuestros días: un *proceso de colonización campesina permanente*, desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta hoy, donde no se da ninguna regulación ni acompañamiento por parte de la sociedad mayor ni del Estado, sino que la organización de la convivencia social y ciudadana queda abandonada al arbitrio y libre juego de la iniciativa de personas y grupos.<sup>90</sup> Esta colonización permanente es producto de tensiones estructurales de carácter secular en el agro colombiano, que están continuamente expulsando población campesina hacia la periferia del país, donde pronto se reproduce la misma estructura de concentración de la propiedad rural que forzó a la migración campesina original, que coexiste con la colonización de terratenientes, de carácter tradicional o empresarial. Esta coexistencia y competencia por la tierra y la mano de obra será frecuentemente conflictiva.<sup>91</sup>

Como resultado de estos procesos, la estructura actual de la propiedad de la tierra es altamente concentrada y dedicada mayoritariamente a la ganadería extensiva, que no requiere mucha mano de obra. Absalón Machado<sup>92</sup> considera que el país subutiliza las tres cuartas partes de las tierras aptas para la agricultura, mientras que se sobreutiliza en ganadería el 132%. Este autor considera que la característica dominante en la última década, entre 1984 y 1996, es el avance de la gran propiedad, el deterioro de la mediana y la continua fragmentación de la pequeña, tres fenómenos que suelen ir acompañados por violencia, desplazamiento de pobla-

dores rurales y masacres perpetradas por grupos paramilitares.<sup>93</sup> Así, en 1984 los propietarios de menos de 10 hectáreas eran el 77% y poseían el 9,02% de la superficie, mientras que los propietarios de más de 500 hectáreas eran el 0,46% y controlaban el 32,72% de la tierra. Para 1996, los propietarios de menos de 10 hectáreas eran el 77,9% con el 7,82% de la tierra, y los de más de 500 hectáreas eran sólo el 0,35% con el 44,63% de la superficie. No es raro entonces que la Misión Rural sobre pobreza señalara que en 1995 el 68,9% de la población rural no contaba con recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y que el número de pobres del sector rural había aumentado en un millón de personas entre 1978 y 1995, como indica Esperanza Prada.<sup>94</sup>

Esta estructura continúa hoy expulsando campesinos a las ciudades y a nuevas áreas de colonización, cada vez más marginales. Además, esta colonización permanente evidencia que desde los tiempos coloniales no era tan omnipotente el control que las haciendas, las estructuras de poder de los pueblos rurales y del clero católico ejercían sobre la población rural.<sup>95</sup> Muestra también que, desde la segunda mitad del siglo XVIII, se habían roto ya los vínculos de control y de solidaridad internos de las comunidades rurales, campesinas o indígenas, como lo evidencian los informes de Moreno y Escandón,<sup>96</sup> lo mismo que otros informes de la época.<sup>97</sup> Este rasgo va a diferenciar también a la futura Colombia frente a la evolución histórica de otros países de Hispanoamérica, como México, Perú, Bolivia y Ecuador.

Esta diferenciación va a tener también consecuencias sociales y políticas, pues la contraposición entre colonización campesina, espontánea y aluvional, y estructura latifundista, tradicional o empresarial, se va a reflejar en dos tipos diferentes de adscripción política y de cohesión social, que van a repercutir en las futuras opciones violentas.<sup>98</sup> Una va a ser la cohesión y la jerarquía sociales en las zonas donde predominó la hacienda colonial con su estructura complementaria de minifundio y mano de obra dependiente (aparceros y peones de zonas en las que fueron antes muy importantes las encomiendas y los resguardos indígenas) y los pueblos organizados jerárquicamente, desde los primeros años de la colonia, en torno a los notables locales y sus respectivas clientelas. Otra muy distinta es la cohesión social que se va construyendo en las zonas de colonización campesina aluvional, proveniente de diversas regiones del país, con diversos componentes étnicos (“los pueblos revueltos”), que ocupan las vertientes cordilleranas y los valles interandinos.

Sobre estos diferentes estilos de cohesión social se van a construir formas diversas de adscripción política: en las áreas de colonización marginal, la población estará más disponible a nuevos discursos y mensajes políticos, culturales o religiosos. Hay que subrayar que en las regiones de la llamada colonización antioqueña se dan formas de colonización que varían en el espacio y el tiempo: en las primeras etapas y regiones, se produce un trasplante de las estructuras jerarquizadas y patriarcales de los pueblos de origen (casi siempre del Oriente antioqueño). Pero, en las etapas posteriores, en regiones más marginales, se produce otro estilo de colonización más espontáneo, más libertario y casi anarquista. En estas zonas de colonización aluvional, la participación en las guerras civiles y contiendas electorales es de carácter más voluntario y anárquico: los campesinos se reúnen bajo el mando de un caudillo salido de sus filas, al margen de la estructura de poder de la hacienda y de los pueblos consolidados. Frecuentemente, los dos tipos de adscripción coexisten, pero los miembros de uno y otro suelen mirarse con desconfianza mutua.<sup>99</sup> Esta desconfianza es producto del tipo de articulación que el bipartidismo introduce entre las estructuras locales y regionales del poder y la organización central del Estado nacional, como se verá más adelante.

Estos dos tipos de poblamiento y cohesión social se reflejan en movilizaciones políticas de diversa índole: en las guerras civiles del siglo XIX, como la de los mil días (1899-1901), los ejércitos más regulares se van a reclutar en los altiplanos,

mientras que la guerra de guerrillas va a hacer mayor presencia en las zonas de colonización de las vertientes cordilleranas. También las guerrillas de la violencia de los años cincuenta y las actuales —al menos en su momento fundacional— van a encontrar su escenario privilegiado en ese tipo de región.

## 5 Un estilo particular de construcción del Estado

Estos problemas sociales y políticos se van a ver reforzados por la manera en que se construyó el Estado colombiano y se articularon estos grupos migrantes con la sociedad mayor: desde los tiempos coloniales, las ciudades, haciendas, encomiendas y resguardos, integrados en la sociedad mayor y el Estado colonial, coexistieron con espacios vacíos, de tierras insalubres y aisladas, donde el imperio español y el clero católico tenían una escasa presencia. Algunas de estas zonas, como las selvas del Darién o los desiertos de la Guajira, estaban pobladas por indígenas bastante reacios a la soberanía española y poco dispuestos a integrarse en la economía colonial. Otros territorios, en zonas selváticas y montañosas, sobre todo en las zonas de vertiente y en los valles interandinos, eran de difícil acceso y de condiciones poco saludables: se convirtieron en zonas de refugio de indios indómitos, de mestizos reacios al control de la sociedad mayor; de blancos pobres, que no habían tenido acceso a la propiedad de la tierra en las zonas integradas; de negros y mulatos, libertos o cimarrones, fugados de las minas y haciendas.

Pero, además de esas regiones y sociedades donde el Estado hacía escasa presencia, en las áreas y sociedades más integradas, la presencia del Estado español se caracterizaba por ser de *dominio indirecto*. A diferencia de los Estados plenamente consolidados, en la terminología de Charles Tilly,<sup>100</sup> el Estado español controlaba las sociedades coloniales a través de la estructura de poder local y regional: cabildos de notables locales, de hacendados, mineros y comerciantes, ejercían el poder local y administraban la justicia en primera instancia, en nombre del poder de hecho que poseían de antemano. A mi modo de ver, esta situación fue heredada por la república neogranadina y colombiana, cuyo sistema político bipartidista (basado en la contraposición excluyente pero complementaria entre liberalismo y conservatismo) le permitió articular los poderes locales y regionales con la nación, al ir vinculando las solidaridades y rupturas de la sociedad con la pertenencia a una u otra de estas especies de subculturas políticas, que se constituyeron en dos federaciones de grupos de poderes, respaldados por sus respectivas clientelas.<sup>101</sup>

Este dominio indirecto del Estado implica que el poder estatal no se ejerce a través de instituciones modernas de carácter impersonal sino mediante la estructura de poder previamente existente en la sociedad local o regional, basada en los lazos de cohesión anteriormente existentes en esos ámbitos.<sup>102</sup> Pero este estilo de poder dificulta la consolidación del Estado nacional como detentador del monopolio de la fuerza legítima y como espacio público general de resolución de conflictos, lo que se expresa en la proclividad a la solución privada o grupal de los problemas, frecuentemente por la vía armada. Esto se traduce en la poca presencia política y el escaso tamaño del Ejército Nacional, que en otros países latinoamericanos vehiculó la unidad nacional y sirvió de elemento cohesionador de la sociedad nacional. Esto incide en el no monopolio de la fuerza en manos del Estado nacional, cuyo aparato militar coexiste, durante el siglo XIX, con cuerpos de milicias regionales y grupos armados de

carácter privado, al servicio de hacendados y personajes importantes en la vida local.

## 6 El papel de los partidos tradicionales

En ese sentido, estas carencias del Estado fueron suplidas por los partidos políticos tradicionales, que se construyeron sobre la base social de las jerarquías y cohesión social previamente existentes en las sociedades locales y regionales. Esto produjo un reforzamiento de las identidades locales y regionales desde el nivel de las identidades políticas nacionales: así, la identificación básica de la población con sus grupos primarios de referencia (parentesco nuclear o extenso, vecindario, paisanaje) se hizo más fuerte por la adscripción a las dos subculturas políticas del liberalismo y conservatismo. Todo este proceso caracteriza la formación del Estado colombiano, que no se distancia suficientemente de la sociedad ni logra penetrarla por medio de una administración directa y autónoma, sino que se hace presente en el territorio de manera indirecta, a través de los mecanismos de poder ya existentes en la sociedad, dejando por fuera a las regiones y grupos periféricos de la sociedad.

Este dominio indirecto del Estado sobre la sociedad explica el papel que los partidos tradicionales, el liberalismo y el conservatismo, han venido jugando en la historia política y social de Colombia, así como las dificultades que afrontan actualmente. Estos dos partidos, como dos federaciones de grupos locales y regionales de poder, sirvieron de articuladores de localidades y regiones con la nación, lo mismo que de canalizadores de las tensiones y rupturas que se daban en esos niveles: la pertenencia a uno u otro de los partidos pasaba así por la identidad local y regional, las contradicciones entre regiones y localidades, los conflictos étnicos, las luchas entre generaciones, los enfrentamientos intra- e interfamiliares, los conflictos entre grupos de interés, etc. Así se articulaban los vínculos de solidaridad primaria y tradicional, basados en el parentesco, vecindario, compadrazgo, etc., con los vínculos más abstractos de la ciudadanía y la nación. Pero este estilo de articulación se muestra cada vez más incapaz de expresar las tensiones y conflictos de nuevos grupos y regiones: en el pasado, fracciones del liberalismo lograron expresar esos intereses.

Esta conformación de los partidos como vehículos de identidad nacional y expresión de identidades locales tuvo consecuencias importantes para la construcción de los *imaginarios colectivos que expresan las pertenencias y exclusiones de carácter local, regional y nacional*, que se caracterizan por una extrema intolerancia. El hecho de haberse tomado la relación con la institución eclesiástica como frontera divisoria entre los partidos reforzó el elemento pasional que ya tenían las identidades previas de carácter local. Además, estas identidades se fortalecen más con las experiencias de luchas compartidas en las guerras civiles, con la vida común de campamentos y batallas, junto con los correspondientes *odios heredados* y las *venganzas de sangre*, pendientes de generación en generación.

Esta conformación social y cultural va a configurar los mecanismos de adscripción política y las identidades político-culturales de la mayoría del pueblo colombiano. De esta manera, la población dependiente de la estructura hacendaria va a alinearse políticamente con los dueños de las haciendas, sean éstos del partido que sean. Así, peones, arrendatarios y aparceros van a seguir a sus hacendados como soldados en las guerras civiles y como votantes en la lucha electoral. Otros campesinos serán reclutados forzosa-

mente, pero la participación en la vida de campamento militar y en las acciones bélicas va creando luego posteriores lazos de cohesión social entre ellos, basados en la camaradería de la lucha común. Estos lazos serán luego reforzados por la llamada *venganza de sangre*, que hará más o menos hereditaria la adscripción partidaria, puesto que cada guerra civil se convertirá en la ocasión del desquite o venganza del camarada o pariente muerto en la contienda anterior. Así, se va produciendo una cadena de *odios heredados*, que reproducen las violencias cuando se presenta una ocasión propicia. También aparecen grupos de reales voluntarios, que se vinculan a la lucha civil por motivos más ideológicos y cuya adscripción política corresponde a lazos más modernos de sociabilidad.

Todo este conjunto de adscripciones confluye en socializaciones políticas maniqueas y excluyentes, que definen un *nos-otros*, los que están *dentro* de nuestro grupo de referencia, frente a los otros, que están *fuera* de nuestro marco. En estas configuraciones se juntan identidades y solidaridades primarias de tipo local y regional, fruto de los procesos de colonización antes descritos, con adhesiones más abstractas y solidaridades secundarias. Pero el resultado es siempre la exclusión del otro, del diferente: el habitante del barrio vecino, de la vereda de enfrente, del pueblo cercano, de la región vecina, queda fuera de mi universo simbólico, porque no pertenece a mi comunidad homogénea. Esta exclusión del otro en el nivel primario se refuerza con la exclusión del otro en el nivel nacional. Todo lo cual explica el carácter maniqueo y sectario de nuestras luchas políticas: matar liberales no era pecado para los curas conservadores, porque el liberal *comecuras* era el otro, por fuera de la comunidad de fieles católicos. Y viceversa, los curas *godos* (*españolizantes*, no-patriotas) eran enemigos del progreso y de las ideas democráticas. Pero estas contraposiciones permitían articular la sociedad nacional con las solidaridades locales y regionales.

## 7 Las consecuencias del proceso de formación del Estado nacional

Esta articulación de la sociedad nacional, desde arriba hacia abajo, funcionó, aunque con problemas, durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX.<sup>103</sup> Por esa articulación, donde persiste la cohesión social interna de los poderes locales y regionales y su control sobre la sociedad, no se producen altos niveles de violencia en los años cincuenta, porque estos poderes suplen al Estado. La violencia generalizada estalla cuando se combinan crisis en la estructura nacional de poder con tensiones en las estructuras regionales y locales, a través de las cuales se presenta el dominio indirecto del Estado sobre la sociedad.

Dicha presencia indirecta permitía que este Estado fuera relativamente barato, y que respondiera bastante bien a la escasez de recursos fiscales del país, que nunca tuvo una gran articulación al mercado mundial, ni grandes *booms* de exportaciones, que pudieran configurarlo como un Estado rentista: nunca hubo demasiado oro ni plata, ni guano, cobre, petróleo, trigo o carne de exportación, así que la debilidad del Estado respondía a su pobreza fiscal. Por otra parte, el Estado colombiano tampoco tuvo que afrontar las grandes movilizaciones de corte populista, ni grandes migraciones europeas, ni poderosos movimientos sindicales de corte anarquista, ni la ampliación de las capas medias, que caracterizaron a otros países de Hispanoamérica.

Por ello, no se produce una masiva ampliación de la ciudadanía, ni grandes presiones de las masas populares y de

las clases medias sobre el gasto público, lo que permite un manejo bastante ortodoxo de la economía, sin grandes presiones inflacionarias. Además, la falta de un movimiento populista de carácter inclusionario hizo innecesarias las intervenciones militares en la vida política: la vida política colombiana se caracteriza por la casi total ausencia de dictaduras militares (excepto un corto período en el siglo XIX y la dictadura del general Rojas Pinilla de 1953 a 1957, que fue, en su mayor parte, instrumentalizada por sectores de los partidos tradicionales).

En consecuencia, tampoco se configura un Estado intervencionista e industrializador, ni tampoco un Estado de bienestar de amplia cobertura: por lo tanto, tampoco hay una gran ampliación de una burocracia estatal que produjera un aumento de las capas medias. Por todo ello, la fragmentación existente del poder y de la riqueza, que se da en la sociedad civil, la no aparición de un mercado nacional que integrara las diversas economías regionales y la escasez de recursos fiscales, se refleja en la llamada precariedad del Estado. Tampoco se produce la aparición de una administración pública por encima de los intereses particulares y partidistas, ni un aparato de justicia, objetivo e impersonal, por encima de los grupos de poderes privados y grupales. El resultado de este proceso se expresa en la imposibilidad de separar claramente los ámbitos público y privado, y en la dificultad para estructurar instituciones estatales de carácter moderno, lo mismo que para realizar las reformas necesarias para responder adecuadamente a los cambios de la sociedad colombiana.

## Existe una gran dificultad en la vida política colombiana para integrar y articular los micropoderes y microsociedades de las regiones de colonización, con la sociedad mayor y el Estado

El problema de este tipo de presencia del Estado en la sociedad es que se basa, esencialmente, en la no distinción entre los ámbitos privado y público, que se refleja en la proclividad de la sociedad colombiana a la búsqueda de soluciones privadas a los conflictos. La resistencia a reconocer el espacio público se ve también en las dimensiones de la vida cotidiana, desde la invasión de los andenes de las calles y el irrespeto sistemático a los semáforos y señales de tráfico, hasta la proliferación de conjuntos cerrados de viviendas y de agencias privadas de seguridad. Esto puede resumirse en cierta renuencia de la sociedad colombiana a reconocerse como expresada por el Estado, que, por eso, no logra penetrar la sociedad. De ahí que para autores como Daniel Pecaú, la violencia colombiana tenga menos que ver con los abusos de un Estado omnipotente y omnipresente, y mucho más que ver con los espacios vacíos que deja el Estado en la sociedad, que queda así abandonada a sus propias fuerzas. En ese sentido, este autor señala que el Estado colombiano sigue manteniendo rasgos del siglo XIX, al no estar suficientemente emancipado de las redes de poder privado de la sociedad civil.<sup>104</sup>

Por esta carencia de la dimensión pública y esta presencia indirecta del Estado, además de la cuestión relativa al poblamiento, las violencias colombianas tienen que ver con un tercer aspecto, en el que confluyen los tres puntos anteriores. Es la dificultad que existe en la vida política colombiana para integrar y articular los micropoderes y microsociedades —en proceso de formación— de las regiones de colonización, con la sociedad mayor y el Estado, dado que éstos hacen presencia en esas regiones indirectamente, a través de las jerarquías sociales existentes, articuladas en el bipartidismo. La misma dificultad existe para expresar, en el

nivel simbólico, la pertenencia nacional de estas microsociedades, que se consolidan por *fuera* del sistema bipartidista: lo que está fuera es criminalizado y reprimido. El macartismo anticomunista refuerza el sectarismo excluyente, propio de la cultura política bipartidista, como se verá en el régimen de gobierno compartido entre los dos partidos tradicionales, denominado Frente Nacional, que se decidió entre las cúpulas de los dos partidos tradicionales como mecanismo para poner fin a la violencia de los años cincuenta. Pero que se mostraría incapaz de emprender las reformas necesarias para responder a los rápidos cambios que se estaban produciendo en la sociedad colombiana de los años sesenta.

## 8 Los problemas del Frente Nacional

El final de las violencias del año cincuenta y el tránsito a otras formas más ideologizadas de lucha guerrillera muestra la creciente incapacidad del sistema político bipartidista para coexistir con grupos locales de poder que escapan a su ámbito de poder. Las autodefensas influidas por el partido comunista empiezan a evolucionar hacia formas de poder local fuera del bipartidismo, que son criminalizadas como *repúblicas independientes* por políticos conservadores y las fuerzas armadas. La incapacidad del régimen político para asimilar fuerzas políticas de carácter local, con una base social de colonos campesinos de zonas periféricas, junto con el trabajo ideológico de activistas del partido comunista, da lugar al surgimiento de las FARC.<sup>105</sup> Gonzalo Sánchez ha señalado las limitaciones de las reformas y políticas de los gobiernos de entonces para la inserción de antiguos guerrilleros, especialmente cuando no pertenecían a los partidos tradicionales.<sup>106</sup> Incluso, como señala Alfredo Molano en uno de sus relatos, las reformas y planes beneficiaban más a los amigos y regiones de los jefes políticos que a los propios ex guerrilleros liberales.<sup>107</sup>

Por otra parte, los acelerados cambios de la sociedad colombiana producen un debilitamiento del monopolio que los partidos políticos tradicionales y la Iglesia católica tenían sobre la vida cultural del país. Para ello se combinan factores internos como la rápida urbanización, la ampliación de las capas medias, el aumento de la cobertura educativa, el cambio del rol de la mujer en la sociedad y la acelerada secularización de la sociedad, con factores externos como el influjo de las revoluciones del Tercer Mundo (especialmente la cubana), la mayor presencia de las masas populares en la escena política, la mayor apertura del país a las corrientes del pensamiento mundial, el influjo de las varias tendencias del marxismo y los cambios internos de la Iglesia católica.

Además, la rápida urbanización de la sociedad, producida por las condiciones estructurales del agro colombiano y reforzada por las violencias rurales de los años cincuenta y las décadas siguientes, creó problemas al rebasar ampliamente la capacidad de las administraciones locales para otorgar servicios públicos adecuados y suficientes para la creciente población. Tampoco podía la creciente mano de obra, poco cualificada, ser absorbida por la débil industria colombiana, limitada por la estrechez de un mercado interno de pocos compradores debida a la alta concentración del ingreso, su situación en las regiones centroandinas lejanas a las costas y unos severos problemas de infraestructura y de transporte, en un país cruzado por tres cadenas de montañas, que dificultan su expansión. El desarrollo industrial de los años cincuenta se basaba en el modelo de sustitución de importaciones, que se agotó rápidamente por las limitacio-

nes de la demanda interna. Además, este modelo tampoco generaba muchos empleos ni modificaba en profundidad la estructura de la propiedad, y, por consiguiente, no aumentaba en lo fundamental los ingresos de las clases populares, sino que era necesariamente oligopólico, orientado sustancialmente a satisfacer la demanda de los estratos medios y altos. Esta debilidad industrial hace que la economía colombiana siga dependiendo sobre todo de la exportación de productos primarios como café, petróleo, carbón (y, más recientemente, de algunas exportaciones menores como flores y esmeraldas).

Como muestra Consuelo Corredor,<sup>108</sup> estas debilidades de la industria limitaban la necesidad del desarrollo tecnológico y de la diversificación del aparato productivo, lo que implicaba una limitada capacidad de crear más empleos y, lógicamente, una exclusión de los beneficios del crecimiento para amplias capas de la población en las periferias urbanas y las regiones no plenamente integradas en el conjunto de la economía nacional. Esto hace que la creciente mano de obra, poco cualificada, producida por la migración campo-ciudad, termine engrosando las filas de los desempleados o, en el mejor de los casos, de los sectores de la llamada economía informal.

Estos problemas de larga duración hacen que sean muy altos los niveles de pobreza, que el desempleo abierto haya pasado, en los últimos días, del 20%, y que la calidad del empleo continúe deteriorándose: en 1992 el subempleo era del 14,2%, pero llegó, a finales de 1997, al 18%; en ese mismo período, el empleo temporal ascendió del 18% al 22%.<sup>109</sup> Según el Banco Mundial, en 1992, cerca del 19% de los colombianos recibían ingresos inferiores a los considerados necesarios para la compra de una canasta adecuada de alimentos; de ellos, el 70% habitaba en las zonas rurales. Sin embargo, el mismo estudio mostraba avances entre 1978 y 1992, pues la pobreza absoluta afectaba entonces a un 24% de la población.<sup>110</sup> Por otra parte, la concentración del ingreso pareció ir aumentando desde los años ochenta, pues Libardo Sarmiento muestra que entre 1980 y 1989, el 20% más rico en las ciudades pasó de apropiarse el 52,3% del ingreso urbano al 53,3%, mientras que el 50% más pobre mantenía su 18,9% y las clases medias descendían en un 0,6%.<sup>111</sup> Obviamente, la actual recesión económica debe de haber empeorado esta situación: las medidas de desregulación y apertura comercial produjeron un aumento del consumo, una tendencia a la desindustrialización y un crecimiento del endeudamiento externo, público y privado, que, en la actual situación de recesión, está poniendo en peligro el sistema financiero nacional. Esta situación profundiza la tendencia del sistema financiero a la concentración, con el predominio de cuatro grandes conglomerados (dos de ellos españoles, los grupos Santander y Bilbao Vizcaya).

Por otra parte, los problemas sociales derivados de la difícil inserción en el aparato productivo se agravaban por el carácter *aluvional* de la migración del campo a la ciudad, que acarrea consecuencias para el tejido social de los barrios en formación en las ciudades grandes e intermedias. Inicialmente, esta población migrante reproduce los sistemas internos de cohesión social y de relación clientelista con los partidos tradicionales y la burocracia del Estado. Pero las siguientes generaciones, más socializadas en la vida urbana y más debilitados sus vínculos de cohesión interna y de relación con el sistema clientelista de los partidos, se encuentran más disponibles a nuevos discursos, políticos o religiosos.<sup>112</sup> Sobre todo cuando la población de los barrios no tiene homogeneidad social o regional, sino que es producto de olas diferentes de migración. Y cuando las transformaciones de las ciudades y la crisis económica de algunos sectores producen un deterioro constante de las condiciones de vida de sus barrios y un debilitamiento de los lazos tradicionales o modernos, que constituían el llamado *tejido social*.

En estos barrios, donde el tejido social se está apenas construyendo o se está ya debilitando, los diversos grupos o pandillas juveniles (que expresan los primeros pasos de una socialización incipiente) pueden servir de espacios de reclutamiento para las guerrillas, rural o urbana, y para las bandas armadas del narcotráfico.<sup>113</sup> O para formas de delincuencia común, pequeña o mediana, y, de manera correspondiente, para el reclutamiento de grupos de *vigilantes* o milicianos populares, que responden, desde la *sociedad civil* en formación, a los grupos anteriores. O, más simplemente, las nuevas formas sociales y culturales de estos grupos pueden resultar incomprendidas para las generaciones más viejas.

Por todo esto, los grupos juveniles son fácilmente criminalizados y señalados como *los otros*, distintos de y ajenos a la sociedad mayor, lo que los hace las víctimas principales de formas de *limpieza social*, por parte de la policía o de grupos privados de autodefensa barrial, muchas veces con la complicidad o apoyo de los grupos dominantes de los mismos barrios. También son frecuentemente víctimas de los enfrentamientos entre grupos de delincuencia común y de éstos con la policía.<sup>114</sup> Estos problemas se agravan en el caso de la migración de campesinos y pobladores desplazados por las actuales violencias: estos pobladores se refugian en ciudades intermedias, cuyas condiciones no les permitan asimilarlos en términos de oportunidades de trabajo ni de prestación de servicios.

## Las limitaciones de la reforma agraria oficial y la criminalización de la protesta campesina acentuaron el divorcio entre movimientos sociales y partidos políticos tradicionales

Todos estos cambios fueron haciendo obsoletos los marcos institucionales por medio de los cuales el país solía expresar y canalizar los conflictos y tensiones de la sociedad.<sup>115</sup> Según Daniel Pecaut<sup>116</sup> y Jorge Orlando Melo,<sup>117</sup> los cambios sociales, culturales y económicos de estos años contribuyeron a debilitar las redes de solidaridad tradicional y los correspondientes mecanismos de sujeción individual, pero sin construir nuevos mecanismos de convivencia, ni tampoco nuevas formas de legitimidad social.

En este contexto de cambios profundos, se presenta la radicalización de los movimientos obrero, estudiantil y campesino. El influjo de la revolución cubana es muy fuerte en las capas medias urbanas y en la juventud estudiantil, cuyas perspectivas de integración al aparato productivo y al sistema político no son muy claras: surge allí una nueva *intelligentsia*, influida por las varias líneas del marxismo y de las ciencias sociales, lo que muestra la pérdida del monopolio que ejercían los partidos tradicionales y la Iglesia católica sobre la vida cultural e intelectual del país.<sup>118</sup>

Por otra parte, los problemas sociales, tanto en las ciudades como en el campo, seguían configurando un *caldo de cultivo* para las opciones violentas. En ese sentido, las limitaciones de la reforma agraria oficial y la criminalización de la protesta campesina acentuaron el divorcio entre movimientos sociales y partidos políticos tradicionales. Además, este divorcio se agravó por la presencia de variados movimientos de izquierda, interesados en la radicalización del movimiento campesino. Así, la instrumentalización de los movimientos sociales (sindicalismo, movimiento estudiantil, movimientos barriales, cívicos y populares), al servicio de la opción armada, también influyó en la criminalización de la protesta social y en la lectura complotista de la movilización social.

Esa instrumentalización de los movimientos sociales por la izquierda armada, junto con problemas internos,

impidió la consolidación de una fuerza democrática de izquierda, que canalizara el descontento creciente tanto de las masas populares de la ciudad y del campo como de las capas medias urbanas, y articulara los sectores descontentos con el bipartidismo, que comenzaron a proliferar, en los años sesenta, entre intelectuales, sectores medios y grupos populares. Por otra parte, la criminalización del descontento social, leído desde el enfoque complotista, llevó a la respuesta meramente represiva por parte de los organismos del Estado. Todo lo cual hace que los grupos radicalizados perciban el sistema político como cerrado y como agotadas las vías democráticas de reforma del Estado, lo que condujo a muchos de estos disidentes a la opción armada.

Esta opción se veía favorecida por la escasa presencia estatal en vastos territorios del país (o su estilo indirecto de presencia, a través de las estructuras locales de poder, todavía en formación) y por la existencia de una tradición de lucha guerrillera, presente en numerosos grupos sociales y antiguos jefes guerrilleros de los años cincuenta, no plenamente insertos en el sistema bipartidista del Frente Nacional. Esto era muy visible en las zonas de colonización, adonde seguían llegando campesinos expulsados por las tensiones del agro y la violencia anterior. Sobre todo, cuando desaparecen el MRL (Movimiento Revolucionario Liberal, disidencia del partido liberal, liderado por Alfonso López Michelsen, que sería presidente entre 1978 y 1982) y la ANAPO (Alianza Nacional Popular, grupo populista del antiguo dictador Rojas Pinilla), movimientos de oposición que de alguna manera canalizaban y articulaban políticamente este descontento social.

Así surgen el ELN (Ejército de Liberación Nacional) en 1965 y el EPL (Ejército Popular de Liberación, de inspiración maoísta) en 1967: en el ELN confluyen nuevos actores sociales, salidos de los radicalizados movimientos estudiantil y sindical, influidos por el foquismo castrista, con los viejos protagonistas de los conflictos rurales del Magdalena medio santandereano, resultantes de un proceso aluvional y heterogéneo de colonización campesina, de diverso origen étnico o regional.<sup>119</sup> El proceso de surgimiento del EPL muestra algunas similitudes, con las naturales diferencias regionales: surge en las regiones del Alto Sinú y Alto San Jorge, como brazo armado del Partido Comunista Marxista Leninista, de inspiración maoísta, cuyos cuadros proceden de clases medias urbanas, muchos de ellos de origen antioqueño.<sup>120</sup> Estos cuadros urbanos se encuentran con núcleos de ex guerrilleros liberales de los años cincuenta, que habían sido liderados por Julio Guerra. Estos ex guerrilleros no habían logrado insertarse plenamente en el sistema bipartidista y seguían motivados por el sentimiento de venganza producido por la violencia anterior: venían huyendo de la represión de los gobiernos conservadores de entonces y llegaron a colonizar las selvas limítrofes entre los departamentos de Córdoba y Antioquia.<sup>121</sup> Otros guerrilleros de este grupo provenían de una movilización social más reciente, pues habían sido líderes de las luchas campesinas de esas regiones, en los primeros años de la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), entre 1969 y 1973.

La existencia de estas bases sociales de la guerrilla, tanto en estas zonas como en las de colonización campesina donde las FARC tienen presencia, hace que la violencia guerrillera no pueda reducirse a una dimensión exclusivamente militar. Y, mucho menos, a formas de delincuencia organizada, así muchas de sus actividades de financiación (secuestros, apoyo a narcocultivos, robo de ganado) manifiestan tendencias hacia ella. En muchas zonas, los grupos guerrilleros suplen la ausencia manifiesta de las autoridades estatales, delimitando linderos, protegiendo la posesión precaria de los colonos campesinos, dirimiendo los conflictos familiares y vecinales, e imponiendo normas de convivencia social.<sup>122</sup> Por ello, tienen cierto grado de poder en el

ámbito local, que compite con los gamonales y caciques locales, pero el hecho de que su presencia sea tan dispersa y periférica limita mucho su capacidad de expresarse políticamente.



## El influjo del narcotráfico

Estos factores y tendencias a la violencia se profundizan recientemente con la presencia del narcotráfico: la precariedad del Estado y la crisis de los marcos institucionales que suplían a éste, evidencian una fragmentación y difusión del poder en la sociedad, cuyo tejido social es un amasijo contradictorio de poderes privados. La fragmentación del poder y la precariedad de la presencia estatal van a facilitar la inserción social y política de poderes privados de nuevo cuño, como los carteles de la droga y los paramilitares de derecha, que distan mucho de ser grupos internamente homogéneos, pero que se mueven en la misma dinámica de poderes privados fragmentarios. La competencia por el poder local en zonas periféricas explica muchos enfrentamientos de estos grupos con las guerrillas, al igual que la guerra sucia contra las supuestas o reales bases sociales de la guerrilla. En estos enfrentamientos intervienen también autoridades del orden local, formales o informales, lo mismo que algunos de los mandos de las fuerzas de seguridad del mismo ámbito. En este espacio de poder local, aparece también la acción de las guerrillas sobre las autoridades locales de sus zonas de influencia, donde tratan de ejercer una especie de veeduría sobre la administración pública y el gasto social.

Una situación semejante se presenta en los barrios periféricos de las ciudades, donde el narcotráfico reclutaba sicarios y agentes, lo que producía un auge de la delincuencia común, la consiguiente formación de grupos de autodefensa barrial y la corrupción de los cuerpos policiales, que eran percibidos como otro grupo involucrado en esos conflictos, nunca como una fuerza legítima por encima de ellos.

Por otra parte, la penetración de los dineros del narcotráfico en la vida económica, social y política de la nación empeora todos los problemas al deslegitimar profundamente a las instituciones políticas y ahondar la crisis de representación política que aqueja a la sociedad colombiana en los tiempos recientes, como resultado de la incapacidad de los partidos tradicionales y del Estado para interpretar y canalizar los cambios que se han venido produciendo.

El resultado de esta combinación de conflictos de tan diversa índole, donde se combinan nuevos y viejos actores, es la *creciente autonomía y difusión de las formas violentas*: la guerra pierde la racionalidad de medio político para convertirse en una mezcla inextricable de protagonistas declarados y ejecutantes oficiosos, que combinan objetivos políticos y militares con fines económicos y sociales, así como iniciativas individuales con acciones colectivas y luchas en el ámbito nacional con enfrentamientos de carácter regional y local.<sup>123</sup>

Además, en una etapa ulterior, estas apelaciones a la violencia por motivos políticos, económicos y sociales se difunden por todo el tejido de la sociedad colombiana: la violencia se convierte así en el mecanismo de solución de conflictos privados y grupales. Problemas de notas escolares, enfrentamientos en el tráfico vehicular, problemas entre vecinos, peleas entre borrachos, tienden a resolverse por la vía armada, porque no existe la referencia común al Estado como espacio público de resolución de los conflictos.

Esta indefinición de los límites entre violencia pública y privada, violencia política y no política, motivaciones individuales y acciones colectivas, se hace mayor cuando los gru-

pos guerrilleros salen de los nichos de las regiones de colonización marginal donde habían nacido para proyectarse a zonas económicamente más ricas, en momentos de rápida expansión económica combinada con una marcada desigualdad del acceso a la nueva o vieja riqueza. Allí la lógica extorsiva de los grupos insurgentes encuentra muy pronto la respuesta lógica de la tradición política colombiana a lo largo de su historia, que responde a la incapacidad del Estado para detentar el monopolio de la fuerza legítima: el recurso a formas privadas de violencia, paramilitares o autodefensas, por parte de grupos locales de poder, con la ausencia, complicidad u omisión de las autoridades del Estado. Con el agravante de que las tensiones de las FARC con antiguos militantes de otros grupos armados insurgentes, junto con su autoritarismo con respecto a sus propios militantes y su actitud militarista con sectores de la población civil, favorecen el reclutamiento y la expansión del paramilitarismo en sectores de la población.

## 10 Las transformaciones de los actores armados

En el sentido señalado de la expansión guerrillera más allá de sus nichos originales, Camilo Echandía<sup>124</sup> observa, desde la Séptima Conferencia de las FARC, en 1982, un continuo crecimiento de los frentes, hecho posible, en parte, por los recursos derivados de la coca en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Cauca, Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta. Siguiendo estos desarrollos, el accionar de las FARC muestra importantes cambios en los años ochenta, al hacer presencia en zonas que experimentan transformaciones hacia la ganadería extensiva (Meta, Caquetá, Magdalena Medio y Córdoba) o hacia la agricultura comercial (zona bananera de Urabá, partes de Santander y sur del Cesar). O incluso en zonas de explotación petrolera (Magdalena Medio, Sarare, Putumayo) y aurífera (Bajo Cauca antioqueño y sur de Bolívar). Y se van situando también en zonas fronterizas (Sarare, norte de Santander, Putumayo, Urabá) y en zonas costeras (Sierra Nevada, Urabá, occidente del Valle), vinculadas con actividades de contrabando.

En un sentido similar, Teófilo Vásquez<sup>125</sup> distingue varias fases en el accionar de las FARC: entre 1966 y 1977, sigue siendo una guerrilla *partisana*, de lento desarrollo de efectivos y frentes, muy subordinada al partido político. Esta situación se modifica entre 1977 y 1983, con los bombardeos contra El Pato (1978), que reactivan el bloque histórico de las FARC, la represión generalizada a partir del Estatuto de seguridad bajo la presidencia de Julio César Turbay (1978-1982), que convenció a muchos dirigentes de que la vía armada era el único camino posible, y la lectura del paro cívico de 1977 como síntoma de un supuesto clima de insurrección general. El cambio de estrategia se expresa en la decisión de la VII Conferencia de las FARC de pasar de la actitud defensiva a la ofensiva, que inicia la tendencia al predominio de la mirada militar sobre el enfoque más político. Una tercera fase estaría marcada por el proceso fallido de incorporación a la vida legal, durante el proceso de paz del presidente Belisario Betancur (1982-1986), que se expresaría en los pactos de cese al fuego de La Uribe, Meta (1984) y el lanzamiento del movimiento político de la Unión Patriótica (1985). El fracaso de esta experiencia llevaría a un mayor predominio del aparato militar y el regreso al nomadismo guerrillero, que se agravaría con el ataque militar del ejército a la sede central del secretariado de las FARC en La Uribe (1990). La respuesta a este ataque sería una ofensiva militar sin precedentes por parte de las FARC, que alcanza el mayor registro de acciones

bélicas entre 1991 y 1992. Este fortalecimiento de la dimensión militar se expresa en el replanteamiento de la VIII Conferencia de las FARC, que deciden avanzar hacia la construcción de un ejército capaz de pasar a la guerra de posiciones y de un movimiento político clandestino (el “movimiento bolivariano”).

En el caso del ELN, Camilo Echandía observa una tendencia semejante, aunque menor: también en los años ochenta empieza a resurgir después de su derrota militar en Anorí (1973), con un aumento significativo de frentes, gracias al fortalecimiento económico que logró con la extorsión a las compañías extranjeras que construía el oleoducto Caño Limón-Coveñas. Luego de iniciada la explotación petrolera del Arauca, como muestra Andrés Peñate,<sup>126</sup> el ELN fue desarrollando hábiles esquemas clientelistas para desviar recursos del erario público a favor de sus amigos. Y fue expandiendo sus frentes, siguiendo la línea de la explotación petrolera. Según Alejo Vargas, desde su recomposición en los años ochenta, el ELN da un viraje hacia la presencia de una guerrilla móvil con tendencia a arraigarse regionalmente e insertarse así en nichos sociales de apoyo, buscando gestar un proyecto de poder popular en el espacio geográfico de su trabajo. Y, en el contexto actual, parece desarrollar dos estrategias, no necesariamente excluyentes: por una parte, consolidar su estrategia de guerra y mantener o acelerar su ritmo de crecimiento; por otra, avanzar hacia una Convención Nacional para construir consensos de solución de los problemas asociados al conflicto armado.<sup>127</sup>

Por su parte, como muestra Echandía, el EPL se concentraba, en la década de los ochenta, en las zonas de cierto desarrollo agroindustrial, como Urabá, y en zonas de colonización campesina donde se presentaba expansión de nuevos terratenientes (Urabá y Córdoba), en la región del Viejo Caldas (departamento de Risaralda y oriente de Caldas). También ampliaba su influencia en el suroeste de Antioquia y en zonas de Putumayo y Santander Norte, donde coexisten zonas de colonización campesina con áreas de explotación petrolera. Y en los centros urbanos, particularmente en Medellín. El acuerdo de paz con Belisario Betancur en 1984 le sirvió, como a las FARC, para expandirse a nuevas zonas y aumentar su capacidad militar. El EPL reanuda su accionar militar en 1985, después del asesinato de uno de sus jefes y de la toma del Palacio de Justicia por el M-19. Después de varios años de avances y negociaciones bajo los gobiernos de Barco y Gaviria, el EPL firmó en febrero de 1991 un acuerdo de paz con el gobierno e inició un difícil proceso de desmovilización y reinserción, como muestra la Comisión de Superación de la Violencia, creada ese año,<sup>128</sup> y cuyas vicisitudes analiza Fabio López de la Roche.<sup>129</sup> Pero las FARC pronto coparán el territorio abandonado por el EPL, donde el Estado tampoco se interesa en hacer presencia militar, lo que desencadena una ofensiva paramilitar contra los reductos de las FARC y los grupos del EPL que no aceptaron reinsertarse.<sup>130</sup>

En resumen, entre 1985 y 1995 Echandía constata una gran expansión de la actividad guerrillera, sobre todo en las zonas de minifundio cafetero (afectado por la crisis internacional de precios), el latifundio ganadero de la Costa Caribe y la agricultura de tipo empresarial donde existe gran población rural. También se registra un importante crecimiento del accionar insurgente en las zonas de minifundio andino deprimido, pero en menor proporción, lo mismo que en las áreas rurales cercanas a las ciudades. En las zonas de colonización marginal, donde su presencia había sido tradicionalmente fuerte, sigue la expansión pero más lenta. Y concluye que la guerrilla ha diversificado su tipo de presencia según las características de cada región: las zonas de colonización marginal, donde se inició, son consideradas *áreas de refugio*, mientras que las zonas donde se implantó significativamente antes de 1985 se constituyen en *áreas para la captación de recursos*, quedando los municipios donde pretende expandirse ahora como *áreas de confrontación armada*.<sup>131</sup> Esta nueva geografía de la guerrilla respondería a un nuevo propósito

estratégico, que implicaría pasar de la situación original en la periferia del sistema económico a tocar el centro de la actividad agropecuaria en las zonas más dinámicas. Y obligaría a superar la relación de causalidad directa entre violencia y altos niveles de pobreza.<sup>132</sup>

Algunos, como el propio Echandía y Eduardo Pizarro, han leído esta evolución como una refutación que deja sin piso las explicaciones de las violencias referidas a las llamadas causas objetivas, y concluyen que hay que entenderlas como resultados de una decisión subjetiva en un contexto histórico dado. Pero, a mi parecer, lo que demuestran estos datos es la necesidad de combinar el énfasis en la acción voluntaria y planificada de actores políticos armados de corte jacobino con análisis diferenciados de la situación campesina en cada una de las regiones señaladas, que expresarían las condiciones —sociales y económicas— de posibilidad para la inserción inicial y posterior consolidación de los actores armados. Lo que tendríamos sería una astuta combinación de un accionar militar y un recurso al terror con la explotación de las inequidades sociales, especialmente en las áreas donde hay una rápida expansión económica que coexiste con zonas de colonización campesina tradicional, cuya situación de pobreza contrasta con la nueva riqueza producida, o con población campesina deprimida cercana a las ciudades, sujetas al mismo contraste de situaciones, o, como el caso del campesino cafetero, donde se produce un notable deterioro de unas condiciones económicas tradicionalmente favorables. Esto señalaría la necesidad de considerar aspectos subjetivos, como la percepción relativa de su situación con respecto al entorno, junto con condiciones objetivas, como la debilidad estructural del campesinado, el tipo de presencia del Estado y la representatividad de los partidos políticos tradicionales. Obviamente, tanto los cambios subjetivos como los objetivos afectan necesariamente los poderes locales y regionales —vehiculados por el bipartidismo— a través de los cuales se expresa indirectamente la presencia del Estado.

En ese sentido, apuntarían Jesús Antonio Bejarano y su equipo de investigadores, al indicar la relación entre las violencias y el contraste de las rápidas transformaciones sociales y económicas que se operan en las zonas conflictivas con el rezago del Estado en implantar en ellas su normatividad e instituciones: en áreas de frontera o de rápida expansión, la impunidad y la violencia aumentan con las migraciones internas, el crecimiento demográfico, el auge del mercado, la precariedad de la posesión de la tierra. Así, concluye este autor, el auge de la violencia homicida está reflejando “la pérdida del monopolio del Estado en cuanto al uso de la coerción y del uso legítimo de la fuerza, así como señala también la incapacidad de una sociedad y de su aparato judicial para solucionar civilizadamente sus conflictos...”<sup>133</sup>

En una posición similar, se encontraría Alfredo Rangel cuando señala que, en esas regiones de rápida expansión, la guerrilla aprovecha las expectativas insatisfechas provocadas por una bonanza en una región empobrecida y suple la deficiencia del Estado, cuya capacidad de control queda rebasada en el caso de las bonanzas ilegales y cuya capacidad de regulación anticipatoria queda superada en las legales. Esto crea ambientes de anarquía e inequidad, que hacen posible que la guerrilla aparezca ante los campesinos como instrumento de utilidad pública que genera cierto orden y presión a favor de cierta redistribución social de los excedentes de las bonanzas. Por eso, Rangel caracteriza a la guerrilla como bandolerismo “estatizante”, que ejerce —de manera bastante autoritaria— funciones que el Estado no cumple o cumple mal.<sup>134</sup> Y aprovecha las medidas de descentralización introducidas por la nueva normatividad y las debilidades de la autoridad estatal en el nivel local, donde los aparatos coercitivo y judicial son muy precarios, para ir ampliando su control territorial e ir copando algunas regiones, con prácticas clientelistas no muy diferentes de las de las elites tradicionales de los partidos, pero reforzadas con la

coacción armada.<sup>135</sup> Se combinan las alianzas premodernas con los viejos caciques de las localidades con la tutela, por la vía del terror, sobre funcionarios públicos modernos. El número de alcaldes y concejales muertos, secuestrados o amenazados, va en aumento constante.<sup>136</sup>

Para constatar la complejidad de la situación, convendría señalar, como hace Fernando Cubides, que la expansión paramilitar parece darse en contravía de la guerrillera: mientras que la guerrilla se incrementa más en áreas del minifundio cafetero, en ciudades intermedias y en zonas agroindustriales con mayor población urbana, la presencia paramilitar nace en zonas más desarrolladas e integradas y se expande en las zonas periféricas, donde hay más debilidad institucional y mayores reclamos por la presencia del Estado.<sup>137</sup>

Este marco global de la evolución de la confrontación armada en los años recientes ilustra la magnitud del reto que afronta el país y la urgencia de la búsqueda nacional de una salida negociada al conflicto. Esta mayor conciencia de la sociedad colombiana sobre la urgencia de conseguir la paz se expresó, en octubre de 1998, en el llamado “mandato ciudadano por la paz”, un plebiscito de casi diez millones de colombianos, y en múltiples movilizaciones y actividades en pro de la paz,<sup>138</sup> pero que no parecían confluír en un movimiento más orgánico. Esta urgencia sentida influyó no poco en el triunfo electoral de Andrés Pastrana, después de que un comunicado de las FARC descalificara la candidatura de Horacio Serpa y le diera un “disimulado visto bueno” a la de Pastrana, que había manifestado su interés por reunirse personalmente, una vez electo, con los líderes de la guerrilla.<sup>139</sup>

## 11

### Hacia la salida negociada

En ese contexto, la foto del presidente electo con Manuel Marulanda Vélez, *Tirofijo*, el 9 de julio de 1998, dio la vuelta al mundo y despertó un sentimiento general de euforia y optimismo en la sociedad colombiana, después del clima de pesimismo imperante en el cuatrienio anterior del presidente Samper, cuya falta de legitimidad política había hecho imposible cualquier tipo de negociación con la insurgencia. Esta audacia del presidente, la confianza del gobierno de Estados Unidos en él, el respaldo de los gremios productivos y del establecimiento en general, junto con el acatamiento de los altos mandos de las fuerzas armadas a la política de paz, constituyeron una “coyuntura de oportunidad” favorable a la salida negociada al conflicto, como muestra Francisco Leal Buitrago.<sup>140</sup>

Otro golpe de audacia fue la aceptación, por parte del gobierno, del despeje de cinco municipios en Meta y Caquetá, el 14 de octubre de 1998, que constituyó un paso adelante para generar confianza entre el gobierno y la guerrilla. Pero la falta de acuerdos precisos sobre las implicaciones de este despeje iba a sembrar semillas de discordia y desconfianza, como se evidenció en la controversia en torno a la presencia del batallón Cazadores en San Vicente del Caguán, que despertó muchas inquietudes entre los mandos militares. El mismo efecto produjo en la opinión pública el veto a la presencia de la fiscal en el mismo municipio. Después de un tira y afloja de varias semanas, el gobierno terminó aceptando el retiro de los soldados y la verificación de éste por parte de las FARC. Así, el 7 de enero de 1999 pudo instalarse la mesa del diálogo entre las partes en San Vicente del Caguán, pero sin la presencia del jefe guerrillero, Tirofijo, cuya ausencia fue interpretada por algunos como desplante al presidente. Según la guerrilla, la ausencia se debió al riesgo de un atentado paramilitar.

Pero el camino no iba a ser fácil, como lo mostraron la tragedia de Machuca, donde la tradicional estrategia del ELN de golpear la infraestructura petrolera desencadenó la destrucción de parte del pueblo y la muerte de muchos de sus pobladores, y el ataque contra la base policial de Mitú (Vaupés) por parte de las FARC, en desarrollo de su tradicional estrategia de mostrar fuerza antes de sentarse a negociar, sin caer en la cuenta de que podría ser contraproducente al disminuir el margen del gobierno frente a sus propios partidarios de derecha.

El asesinato de tres indigenistas norteamericanos a manos de las FARC constituyó otro obstáculo al proceso, lo mismo que la congelación de los diálogos, por parte de las FARC, mientras el gobierno no mostrara resultados concretos en la lucha contra el paramilitarismo. Por otra parte, la discusión sobre la entrega de una lista de militares supuestamente involucrados en relaciones con grupos militares empeoró la ya deteriorada relación del Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, con los mandos militares. Los desacuerdos sobre la política de paz llevaron a la renuncia de Rodrigo Lloreda como ministro de defensa, acompañada de rumores sobre el retiro de varios generales en su respaldo, que fueron conjurados rápidamente. Además, los golpes militares de la guerrilla, esta vez conjurados por el ejército, cuya capacidad de respuesta parece irse incrementando, no favorecían el ambiente favorable a la paz. Ni tampoco la proliferación de secuestros indiscriminados en las carreteras (las llamadas *pescas milagrosas*), ni el avance de los grupos paramilitares en varias regiones, ni sus secuestros de defensores de los derechos humanos, como los miembros del IPC, Instituto Popular de Capacitación de Medellín, ni de la senadora Piedad Córdoba.

Todo este panorama dejaba poco campo al optimismo hasta que el 2 de mayo de 1999, una nueva foto y reunión del presidente Pastrana con Tirofijo le dio un segundo aire al proceso: se firma un nuevo acuerdo en Caquetania en que las partes de comprometen a iniciar la fase de negociación y conformar una comisión de acompañamiento. Y el 6 de mayo, los comisionados de las partes terminan de redactar una agenda común de negociación, que empieza por el acuerdo sobre la necesidad de buscar una solución política negociada por medio de transformaciones políticas, económicas y sociales que permitan consensos para la construcción de un nuevo Estado fundamentado en la justicia social, que conserve la unidad nacional. Algunos puntos de la agenda son la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos, incluidos los económicos, sociales, culturales y del medio ambiente, y la búsqueda de acuerdos sobre el Derecho Internacional Humanitario (desvinculación de niños, erradicación de minas antipersonales, respeto a la población civil). Otras cuestiones son una política agraria integral, la explotación y conservación de los recursos naturales, la estructura económica y social (el modelo de desarrollo, la redistribución del ingreso, las políticas sociales, etc.). También aparecen la reforma política para la ampliación de la democracia, las reformas del Estado y de la justicia, el papel de las fuerzas militares y las relaciones internacionales, para terminar con el desarrollo de instrumentos democráticos para legitimar y formalizar los acuerdos.

Esta agenda parece moverse en el ámbito de la llamada *paz positiva*, encaminada a la solución de los problemas estructurales subyacentes a las violencias, que coincidiría con el enfoque del discurso de posesión presidencial y de la primera presentación del Comisionado de Paz. Pero este enfoque no parece coherente con el plan de desarrollo presentado por el gobierno —Cambio para construir la paz—, que deja en manos del mercado el pacto social y político a favor de la paz y no ofrece ninguna medida redistributiva que respalde los diálogos de paz.<sup>141</sup> Por eso, se ha criticado frecuentemente la falta de una estrategia global y coherente, lo mismo que el énfasis en la presencia en los medios masivos de comunicación.

Sin embargo, de manera sorpresiva, cuando todo estaba listo para el inicio de las conversaciones en La Uribe el 7 de julio, un día antes, las dos partes anuncian un nuevo aplazamiento, aduciendo motivos logísticos, que fueron recibidos con cierta incredulidad. El escepticismo aumentó con un documento de la Defensoría del Pueblo, que denunciaba la retención de 34 civiles y la ejecución de 11 personas por parte de las FARC en la zona de despeje. Estas denuncias fortalecieron la convicción de la necesidad de una Comisión de Verificación, internacional o nacional, que pudiera conocer este tipo de quejas. La falta de acuerdo sobre esta comisión, rechazada por las FARC por no estar contemplada en los acuerdos previos, ocasionó un segundo aplazamiento de las conversaciones, que deberían reanudarse el 19 de julio. El 20 de julio, en su discurso de instalación del Congreso, el presidente Pastrana pareció endurecer su posición al notificar a las FARC que la paciencia de su gobierno y de 38 millones de colombianos se estaba agotando y que la negociación sin verificación sería inútil.

A partir de entonces, las posiciones de las partes parecían seguir radicalizándose: Tirofijo insistía en que nunca hubo acuerdo sobre la verificación y que el gobierno quería introducir condiciones al proceso, mientras que un comunicado de las FARC acusaba al gobierno de no tener real voluntad de paz, por su inacción contra los paramilitares y su *alianza guerrillista* con Estados Unidos. Pero, sorpresivamente, el 25 de septiembre se anuncia un acuerdo para negociar sin tener en cuenta la verificación y se acepta, el 28 de septiembre, conformar una comisión de quejas, integrada por las dos partes, para atender las inquietudes sobre el despeje. Finalmente, se anuncia el 24 de octubre como fecha para reiniciar las conversaciones.

**E l grito de “No más” constituye un llamado que no pueden seguir ignorando los interesados en prolongar el conflicto, pero es sólo el comienzo de un largo camino hacia la paz que los colombianos queremos construir**

Por otra parte, la creciente resistencia de la opinión pública frente a la ausencia de reglas claras sobre la presencia y autoridad de las autoridades civiles y judiciales en las zonas del despeje, y de un claro acuerdo sobre la presencia del ejército, pudo haber llevado al gobierno a endurecer sus posiciones frente al ELN y a negar cualquier concesión para ellos. Además, la percepción de las concesiones del gobierno frente a las FARC como exageradas reforzaba la resistencia de la opinión pública a cualquier tipo de concesión. Por otra parte, la percepción del ELN de ser objeto de un tratamiento de segunda clase por parte del gobierno le lleva a ampliar sus exigencias, para no ser menos que las FARC. Así, del acuerdo inicial que permitía la actuación de la policía en los sitios acordados para las reuniones, donde el ejército permanecería acuartelado, pasó a exigir el despeje de varios municipios del sur de Bolívar. La negativa del gobierno conduce al ELN a actos terroristas como el secuestro de los pasajeros del Fokker de Avianca y de los feligreses de Cali, que despiertan honda preocupación en la opinión pública nacional e internacional y generan un apoyo a la dinámica de la movilización ciudadana en contra del secuestro. Pero también generan una respuesta paramilitar en el Valle, que obliga al desplazamiento forzoso de pobladores rurales del centro del departamento. Sin embargo, en los últimos días, se han logrado avances en los acercamientos del gobierno con este grupo insurgente.

Estos dos procesos han coincidido con una mayor movilización ciudadana en pro de la paz y una mayor presencia de organizaciones de la sociedad civil en el apoyo a las

negociaciones. Precisamente, el 24 de agosto, un grupo de organizaciones sociales y otro de intelectuales y académicos enviaron mensajes a las dos partes para presionar el inicio inmediato de las negociaciones, sin tener en cuenta el aspecto de la negociación. Esta mayor presencia de la sociedad civil se traduce en un incremento de acciones por la paz, que se venía presentando a partir de 1988, pero que no lograba articularse en un movimiento más orgánico.<sup>142</sup> Ese movimiento se expresa en movilizaciones multitudinarias en contra del secuestro y la desaparición forzosa, que confluyeron en la marcha del 24 de octubre pasado, que reunió a más de diez millones de colombianos en las diversas ciudades, para pedir el cese inmediato al fuego, la exclusión de la población civil del conflicto armado y el comienzo de las negociaciones.

En la organización de estas marchas confluyeron los esfuerzos de más de 800 organizaciones de variada índole, entre las que destacan la Red de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra, REDEPAZ, la Red Nacional de Mujeres, la Comisión Colombiana de Juristas, el Mandato Ciudadano por la Paz, la Fundación País Libre, organizada contra el secuestro. Estos esfuerzos de movilización se inspiraron en las marchas de los españoles contra la violencia de ETA. El grito de "No más" constituye un llamado que no pueden seguir ignorando los interesados en prolongar el conflicto, pero es sólo el comienzo de un largo camino hacia la paz que los colombianos queremos construir.

## NOTAS

- Según datos de la Fundación País Libre (asociación de apoyo a las víctimas del secuestro), en 1997 se registraron en Colombia 1.693 casos de secuestro, de los cuales se atribuyen 867 a la guerrilla, 800 a la delincuencia común y 26 a los paramilitares. Según la oficina del Zar Antisecuestro (director de Oficina Gubernamental contra el secuestro), en 1998 se produjeron 1.887 secuestros, y en 1999, desde enero hasta abril, eran ya 594 los secuestrados. De los secuestros del último cuatrienio, se atribuyen 1.747 a las FARC.
- CODHES (Consultoría para el Desplazamiento Forzado y los Derechos Humanos), *Un país que huye. Desplazamiento y violencia en una nación fragmentada*, Bogotá, CODHES y UNICEF, 1998.
- Mauricio Rubio, *Crimen e impunidad. Precisiones sobre la violencia*, Bogotá, Tercer Mundo y CEDE (Unianandes), 1999, pp. 37-38.
- Ibidem, pp. 38-39.
- Saúl Franco, *El Quinto: no matar*, Bogotá, Tercer Mundo e IEPRI, Universidad Nacional, 1999, pp. 81-84.
- El Espectador*, Bogotá, 11 de mayo de 1999.
- Saúl Franco, o.c., pp. 116-117.
- Ibidem, pp. 118-119.
- Ibidem, pp. 121-126.
- El Espectador*, Bogotá, 11 de mayo de 1999.
- Mauricio García, "Una aproximación al contexto de los derechos humanos en Colombia", Bogotá, CINEP, 1999 (inédito).
- Adolfo Aterhortúa, *El poder y la sangre. Las historias de Trujillo (Valle)*, Bogotá, CINEP, Universidad Javeriana de Cali, 1995.
- María Victoria Uribe, *Ni canto de gloria ni canto fúnebre. El regreso del EPL a la vida civil*, Bogotá, CINEP, 1994.
- Alfredo Rangel, *Colombia: guerra en el fin de siglo*, Bogotá, Tercer Mundo y Unianandes, 1998.
- Jesús Antonio Bejarano, *Una agenda para la paz. Aproximaciones desde la teoría de la resolución de conflictos*, Bogotá, Tercer Mundo, 1995, y *Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales*, Bogotá, FONADE y Universidad Externado de Colombia, 1997.
- Quizá el ensayo mejor logrado de esta tendencia es el de la Comisión de Estudios sobre Violencia, creada por el gobierno nacional en 1987, que apareció recogida en *Colombia: violencia y democracia*, Bogotá, Universidad Nacional, 1988.
- Daniel Pecaute, *Crónicas de dos décadas de política colombiana*, Bogotá, Siglo XXI, 1988.
- Germán Guzmán, Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña Luna, *La violencia en Colombia*, Bogotá, Suramericana, 1968.
- Carlos Miguel Ortiz, "Historiografía de la Violencia", en *La Historia al final del milenio. Ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana*, Bogotá, Universidad Nacional, 1994.
- Vernon Fluharty, *La Danza de los Millones. Régimen militar y revolución social en Colombia (1930-1956)*, Bogotá, El Áncora, 1981.
- Robert Dix, *Colombia: The Political Dimensions of Change*, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1967.
- Ramsey Russel, *Guerrilleros y soldados*, Bogotá, Tercer Mundo, 1981.
- Richard Weinert, "Violence in Pre-Modern Societies: Rural Colombia", *The American Political Science Review*, 2, junio de 1966.
- William Payne, *Patterns of Conflict in Colombia*, New Haven (Conn.), Yale University Press, 1968.
- Robert Williamson, "Toward a Theory of Political Violence", *Western Political Quarterly*, marzo de 1965.
- Paul Oquist, *Violencia, conflicto y política en Colombia*, Bogotá, Banco Popular, 1978.
- Pierre Gilhodés, *Politique et Violence. La question agraire en Colombie*, París, Armand Colin, 1974, y *Las luchas agrarias en Colombia*, Medellín, La Carreta, 1974.
- Eric Hobsbawn, *Rebeldes primitivos*, Barcelona, Ariel, 1968.
- James Henderson, *Cuando Colombia se desangró. Un estudio de la Violencia en metrópoli y violencia*, Bogotá, El Áncora, 1984.
- Carlos Miguel Ortiz, *Estado y subversión en Colombia. La violencia en el Quindío años cincuenta*, Bogotá, CEREC, 1985.
- Jaime Arocha, *La violencia en el Quindío*, Bogotá, Tercer Mundo, 1979.
- Roberto Pineda Giraldo, *El impacto de la violencia en el Tolima: el caso de El Líbano*, Bogotá, Departamento de Sociología, Universidad Nacional, 1960.
- Gonzalo Sánchez y Donny Meertens, *Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la violencia en Colombia*, Bogotá, El Áncora, 1983.
- Darío Fajardo, *Violencia y desarrollo. Transformaciones sociales en tres regiones del Tolima*, Bogotá, Suramericana, 1979.
- Gonzalo Sánchez, "Violencia, guerrillas y estructuras agrarias" y "La violencia: de Rojas al Frente Nacional", en *Nueva Historia de Colombia*, Bogotá, Planeta Colombiana, 1989, y "Raíces históricas de la amnistía o las etapas de la guerra en Colombia", en *Ensayos de Historia Social y Política del siglo XX*, Bogotá, El Áncora, 1985.
- Katherine Legrand, "Los antecedentes agrarios de la violencia: el conflicto social en la frontera colombiana, 1850-1936", en Gonzalo Sánchez y Ricardo Peñaranda, *Pasado y presente de la violencia en Colombia*, Bogotá, CEREC, 1986.
- Medófilo Medina, "La resistencia campesina en el sur del Tolima", en Sánchez y Peñaranda, o.c.
- Carlos Miguel Ortiz, "La Violencia y los negocios. Quindío años 50 y 60", ibídem. Este capítulo fue un avance de su libro *Estado y subversión en Colombia. La violencia en el Quindío años cincuenta*, Bogotá, CIDER, Unianandes y CEREC, 1985.
- Herbert Braun, "Los mundos del 9 de abril, o la historia vista desde la culata", en Sánchez y Peñaranda, o.c. También este capítulo era un avance de su libro *Mataron a Gaitán. Vida pública y violencia urbana en Colombia*, Bogotá, Universidad Nacional, 1985.

40. Daniel Pecaú, *Orden y violencia: Colombia 1930-1954*, Bogotá, Siglo XXI y CEREC, 1987, y *Crónicas de dos décadas de política colombiana*, Bogotá, Siglo XXI, 1988.
41. Comisión de Estudios sobre la Violencia, *Colombia: violencia y democracia*, Bogotá, Universidad Nacional, 1987.
42. Javier Guerrero, *Los años del Olvido. Boyacá y los orígenes de la violencia*, Bogotá, Tercer Mundo e IEPRI, Universidad Nacional, 1991.
43. Elsy Marulanda, *Colonización y conflicto. Las lecciones del Sumapaz*, Bogotá, Tercer Mundo e IEPRI, Universidad Nacional, 1991.
44. Darío Betancur y Martha García, *Matones y cuadrilleros. Origen y evolución de la violencia en el occidente colombiano, 1946-1965*, Bogotá, Tercer Mundo e IEPRI, Universidad Nacional, 1990.
45. Carlos Medina Gallego, *Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia. Origen, desarrollo y consolidación. El caso "Puerto Boyacá"*, Bogotá, Documentos Periodísticos, 1990.
46. Carlos Medina Gallego, *ELN: una historia contada a dos voces*, Bogotá, Rodríguez Quito, 1996.
47. Mery Roldán, "Guerrillas, contrachusmas y caudillos durante la violencia en Antioquia, 1949-1953", *Estudios Sociales*, 4, marzo de 1989 (Medellín).
48. María Teresa Uribe, *Urabá: ¿región o territorio? Un análisis en el contexto de la política, la historia y la etnicidad*, Medellín, CORPOURABA e INER-Uniantioquia, 1992, y Clara Inés García, *Urabá. Región, actores y conflicto, 1960-1990*, Medellín, CEREC e INER-Uniantioquia, 1996, y "Antioquia en el marco de la guerra y la paz: transformaciones de la lógica de los actores armados", *Controversia*, 172, julio de 1998.
49. Álvaro Camacho Guizado y Álvaro Guzmán Barney, *Colombia. Ciudad y violencia*, Bogotá, Foro Nacional por Colombia, 1990.
50. Alonso Salazar, *No nacimos pa' semilla*, Bogotá, CINEP, 1990, y (con Ana María Jaramillo) *Las subculturas del narcotráfico. Medellín*, Bogotá, CINEP, 1996.
51. Ana María Jaramillo (con Alonso Salazar), *Las subculturas del narcotráfico. Medellín*, Bogotá, CINEP, 1996, y *Milicias populares en Medellín: entre la guerra y la paz*, Medellín, Corporación REGIÓN, 1994.
52. Gloria Naranjo, *Medellín por zonas*, Medellín, Corporación REGIÓN, 1992, y (con Marta Villa) *Entre luces y sombras. Medellín: espacio y políticas urbanas*, Medellín, Corporación REGIÓN, 1997.
53. Gloria Naranjo y Marta Inés Villa, *Entre luces y sombras. Medellín: espacio y políticas urbanas*, Medellín, Corporación REGIÓN, 1997.
54. Alejo Vargas, *Colonización y conflicto armado, Magdalena Medio Santandereano*, Bogotá, CINEP, 1992.
55. María Victoria Uribe, *Limpiar la tierra. Guerra y poder entre esmeralderos*, Bogotá, CINEP, 1992.
56. José Jairo González, *El estigma de las Repúblicas Independientes, 1955-1965. Espacios de exclusión*, Bogotá, CINEP, 1992.
57. Clara Inés García, *El Bajo Cauca antioqueño. Cómo ver las regiones*, Bogotá, CINEP-INER, 1993.
58. Alonso Salazar y Ana María Jaramillo, *Las subculturas del narcotráfico. Medellín*, Bogotá, CINEP, 1996.
59. Consuelo Corredor, *Los límites de la modernización*, Bogotá, CINEP y Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional, 1992.
60. Fernán González y Fabio Zambrano, *L'État inachevé. Les racines de la violence en Colombie*, París, CINEP y FPH (Fondation pour le Progrès de l'Homme)-CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), 1995.
61. Fabio López de la Roche, *Izquierdas y cultura política. ¿Oposición alternativa?*, Bogotá, CINEP, 1994.
62. Elsa María Blair, *Las Fuerzas Armadas. Una mirada civil*, Bogotá, CINEP, 1993.
63. Mauricio García, *Procesos de paz. De La Uribe a Tlaxcala*, Bogotá, CINEP, 1992.
64. María Victoria Uribe, "Ni canto de gloria ni canto fúnebre. El regreso del EPL a la vida civil", *Papeles de Paz*, Bogotá, CINEP, 1994, y José Jairo González, *Espacio y sociedad. Amazonia colombiana*, Bogotá, CINEP, 1998.
65. Adolfo Atehortúa, *El poder y la sangre. Las historias de Trujillo (Valle)*, Bogotá, CINEP-Universidad Javeriana de Cali, 1995.
66. Iván Orozco, *Combatientes, rebeldes y terroristas: guerra y derecho en Colombia*, Bogotá, Temis y Universidad Nacional, 1994.
67. Germán Palacio y Fernando Rojas, "Empresarios de la cocaína, parainstitucionalidad y flexibilidad del régimen político colombiano: narcotráfico y contrainsurgencia", en Germán Palacio (comp.), *La irrupción del Paredado. Ensayos sobre la crisis colombiana*, Bogotá, ILSA (Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos) y CEREC, 1990.
68. Mauricio Rubio, "Rebeldes y criminales. Una crítica a la tradicional distinción entre el delito político y el delito común", en Jaime Arocha, Fernando Cubides y Myriam Jimeno, *Las violencias: inclusión creciente*, Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas y Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad Nacional, 1998.
69. Así lo señala Andrés Peñate, en su documento de trabajo *El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado*, Bogotá, Uniandes, 1998, citado por Mauricio Rubio. Publicado posteriormente por Malcolm Deas y María Victoria Llorente (comps.), en *Reconocer la guerra para construir la paz*, Bogotá, CEREC, Uniandes, Grupo Editorial Norma, 1997.
70. Mauricio Rubio, o.c., pp. 152-157.
71. Jaime Eduardo Jaramillo, Fernando Cubides y Leonidas Mora, *Colonización, coca y guerrilla*, Bogotá, Universidad Nacional, 1986.
72. Francisco Thoumi, *Economía política y narcotráfico*, Bogotá, Tercer Mundo, 1994.
73. José Jairo González, *Espacio y sociedad. Amazonia colombiana*, Bogotá, CINEP, 1998.
74. Eduardo Pizarro Leongómez, *Las FARC. De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*, Bogotá, Tercer Mundo e IEPRI, Universidad Nacional, 1991.
75. Eduardo Pizarro Leongómez, *Insurgencia sin revolución. La guerrilla colombiana en una perspectiva comparada*, Bogotá, Tercer Mundo e IEPRI, Universidad Nacional, 1996.
76. Arturo Alape, *Las muertes de Tirofijo y otros relatos*, Bogotá, Abejón Mono, 1972; *Las vidas de Pedro Antonio María. Manuel Marulanda Vélez. Tirofijo*, Bogotá, Planeta Colombiano, 1989; *Tirofijo: los sueños y las montañas, 1964-1984*, Bogotá, Planeta Colombiano, 1994.
77. Alfredo Molano, *Los años del Tropel*, Bogotá, CINEP, 1985; *Selva adentro: una historia oral de la colonización del Guaviare*, Bogotá, El Áncora, 1987; (con Darío Fajardo y Julio Carrizosa) *La colonización de la Macarena: yo le digo estas cosas*, Bogotá, Corporación Araracuara y Fondo FEN Colombia, 1989; *Siguiendo el corte. Relatos de guerras y tierras*, Bogotá, El Áncora, 1989; *Aguas arriba. Entre la coca y el oro*, Bogotá, El Áncora, 1990, y *Trochas y fusiles*, Bogotá, El Áncora e IEPRI, Universidad Nacional, 1994.
78. Darío Villamizar, *Aquel 19 será*, Bogotá, Planeta Colombiano, 1995, y *Un adiós a la guerra*, Bogotá, Planeta Colombiano, 1997.
79. Álvaro Villarraga y Nelson Plazas, *Para reconstruir los sueños (Una historia del EPL)*, Bogotá, Fondo Editorial para la Paz, Fundación Progresar, 1994.
80. Fabiola Calvo, *EPL: diez hombres, un ejército, una historia*, Bogotá, ECOE, 1985.
81. Malcolm Deas, "Canjes violentos: reflexiones sobre la violencia política en Colombia", en *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, Bogotá, FONADE y Departamento Nacional de Planeación, 1995.
82. Fernando Gaitán, "Una indagación sobre las causas de la violencia en Colombia", en *Dos ensayos especulativos...*, o.c.
83. Jonathan Hartlyn, *La política del régimen de coalición. La experiencia del Frente Nacional en Colombia*, Bogotá, Tercer Mundo y CEI (Centro de Estudios Internacionales), Uniandes, 1993.

84. Jesús Antonio Bejarano, *Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales*, Bogotá, FONADE y Universidad Externado de Colombia, 1997.
85. En ese sentido son interesantes las aproximaciones a la dimensión subjetiva de la violencia que realizan Carlos Mario Perea, *Porque la sangre es espíritu*, Bogotá, IEPRI y Santillana, 1996, y Elsa María Blair, "Violencia e identidad", *Estudios Políticos*, 13, julio-diciembre de 1998, y "La dimensión subjetiva de la violencia: memorias, identidades e imaginarios colectivos", marzo de 1999 (informe de avance de investigación).
86. Para el desarrollo del síndrome del enemigo, cf. Kurt y Kati Spillmann, "La imagen del enemigo", *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 127, marzo de 1991.
87. Estanislao Zuleta, *El elogio de la dificultad y otros ensayos*, Cali, Fundación Estanislao Zuleta, 1994.
88. Cf. Germán Colmenares, *Historia Económica y Social de Colombia, 1537-1719*, Cali, Universidad del Valle, 1972.
89. Jaime Jaramillo Uribe, "Mestizaje y diferenciación social en el Nuevo Reino de Granada en la segunda mitad del siglo XVIII", en *Ensayos de Historia Social Colombiana*, Bogotá, Universidad Nacional, 1968.
90. Cf. Fernán González, "Espacios vacíos y control social a fines de la Colonia", *Análisis. Conflicto Social y Violencia en Colombia*, 4 (Documentos Ocasionales, 60), Bogotá, CINEP, 1990.
91. Fabio Zambrano, "Ocupación del territorio y conflictos sociales en Colombia", y José Jairo González, "Caminos de Oriente: aspectos de la colonización contemporánea del Oriente colombiano", en *Un país en construcción. Poblamiento, problema agrario y conflicto social* (Controversia, 151-152), Bogotá, CINEP, 1989.
92. Absalón Machado, *La cuestión agraria en Colombia a fines del milenio*, Bogotá, El Áncora, 1998.
93. *Ibidem*, pp. 55-56.
94. Esperanza Prada, "Una tregua para el campo", *Cien días vistos por el CINEP*, 44, abril-julio de 1999.
95. Cf. Basilio de Oviedo, *Cualidades y riquezas del Nuevo Reino de Granada*, Bogotá, Biblioteca de Historia Nacional, 1930, pp. 255-257, y Virginia Gutiérrez de Pineda, *La familia en Colombia. Trasfondo histórico*, vol. I, Bogotá, Universidad Nacional, 1963, pp. 340-343. Las consecuencias políticas de estas tendencias han sido señaladas en mi artículo "Reflexiones sobre las relaciones entre identidad nacional, bipartidismo e Iglesia católica", *V Congreso de Antropología*, 1990.
96. Francisco Antonio Moreno y Escandón, *Indios y mestizos de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII*, Bogotá, Banco Popular, 1985.
97. La existencia de situaciones semejantes en otras zonas del país está corroborada por los informes de Mon y Velarde para Antioquia, De Mier para la región del Bajo Magdalena y el franciscano Palacios de la Vega para las Sabanas de Sucre y Córdoba. Lo mismo que por estudios más recientes como los de Óscar Almarío y Eduardo Mejía sobre los orígenes del campesinado vallecaucano y los de Francisco Zuluaga sobre clientelismo, guerrilla y bandolerismo social en el valle del Patía.
98. Cf. Fernando Guillén Martínez, *El poder político en Colombia*, Bogotá, Punta de Lanza, 1979, y Fernán González, "Poblamiento y conflicto social en la historia colombiana", en *Territorios, regiones, sociedades*, Bogotá, Univalle-CEREC, 1994.
99. El caso que mejor ilustra esta coexistencia es el de la guerra de los mil días (1899-1901). Para ello, se pueden consultar las obras de Carlos Eduardo Jaramillo, *Los guerrilleros del novecientos*, Bogotá, CEREC, 1991, y Charles Bergquist, *Café y conflicto en Colombia, 1886-1910*, Medellín, FAES, 1981.
100. Charles Tilly, "Cambio social y revolución en Europa 1492-1992", *Historia Social*, 15, invierno de 1993.
101. Fernán González, "Claves de aproximación a la historia política colombiana" (mecanografiado, inédito).
102. Cf. Fernán González, "Claves de aproximación a la historia política" (inédito).
103. Cf. Fernán González, "Aproximación a la historia política colombiana", en *Un país en construcción*, vol. II, Estado, Instituciones y Cultura Política (Controversia, 153-154), Bogotá, CINEP, 1989.
104. Daniel Pecaut, *Crónicas de dos décadas de política colombiana, 1968-1988*, Bogotá, Siglo XXI, 1988, pp. 22-23.
105. José Jairo González, *El estigma de las Repúblicas Independientes, 1955-1965. Espacios de exclusión*, Bogotá, CINEP, 1992, y Eduardo Pizarro Leongómez, *Las FARC (1949-1966). De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha*, Bogotá, Tercer Mundo e IEPRI, Universidad Nacional, 1991.
106. Gonzalo Sánchez, "Rehabilitación y violencia bajo el Frente Nacional", *Análisis Político*, 4, mayo-agosto de 1988.
107. Alfredo Molano, "Vida del capitán Berardo Giraldo", en *Siguiendo el Corte. Relatos de guerras y tierras*, Bogotá, El Áncora, 1989.
108. Consuelo Corredor, *Los límites de la modernización*, Bogotá, CINEP y Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional, 1992.
109. Óscar Arcos, "Problema de vieja data", *Cien días vistos por el CINEP*, 41, abril-junio de 1998.
110. Ernesto May (coord.), *La pobreza en Colombia. Un estudio del Banco Mundial*, Bogotá, Tercer Mundo y Banco Mundial, 1996.
111. Libardo Sarmiento, "Apropiación y redistribución del ingreso en Colombia durante la década de los ochenta", en Óscar Fresneda, Libardo Sarmiento y Manuel Muñoz, *Pobreza, violencia y desigualdad: retos para la Nueva Colombia*, Bogotá, PNUD, 1991.
112. Alfonso Torres, *La ciudad en la sombra. Barrios y luchas populares en Bogotá, 1950-1977*, Bogotá, CINEP, 1993.
113. El caso de Medellín ha sido estudiado en varios trabajos por Alonso Salazar y Ana María Jaramillo, de la Corporación REGIÓN. El CINEP ha publicado el libro de ambos, *Las subculturas del narcotráfico. Medellín*, Bogotá, CINEP, 1992.
114. Carlos Rojas, *La violencia llamada limpieza social*, Bogotá, CINEP, 1994.
115. Fernán González, "Tradición y modernidad en la política colombiana", en *Violencia en la Región Andina. El caso Colombia*, Bogotá, CINEP y APEP, 1993.
116. Daniel Pecaut, "Modernidad, modernización y cultura", en GACETA, Instituto Colombiano de Cultura, *Colcultura*, 8, agosto-septiembre de 1990.
117. Jorge Orlando Melo, "Algunas consideraciones globales sobre 'modernidad' y 'modernización' en el caso colombiano", *Análisis Político*, 10, mayo-agosto de 1990.
118. Fabio López de la Roche, *Izquierdas y cultura política. ¿Oposición alternativa?*, Bogotá, CINEP, 1994.
119. Alejo Vargas, *Colonización y conflicto armado. El Magdalena Medio Santandereano*, Bogotá, CINEP, 1992.
120. Claudia Steiner y Gerard Martin, "El EPL: reinserción política y social", *Cuadernos para la Democracia*, 3, julio de 1991, y María Victoria Urbe, "Apuntes para una sociología del proceso de reinserción del EPL", *La Paz: más allá de la guerra* (Documentos Ocasionales, 68), Bogotá, CINEP, septiembre de 1991, y *Ni canto de gloria ni canto fúnebre. El regreso del EPL a la vida civil*, Bogotá, CINEP, 1994 (Colección Papeles de Paz).
121. Mauricio Romero, "Poblamiento, conflicto social y violencia política en el Caribe colombiano, 1950-1986. Estudio de caso sobre el departamento de Córdoba" (mecanografiado, inédito).
122. Cf. los diversos libros sobre zonas de colonización de Alfredo Molano.
123. Daniel Pecaut, o.c., pp. 32-33.
124. Camilo Echandía, "Evolución reciente del conflicto armado en Colombia: la guerrilla", en Arocha, Cubides y Jimeno (eds.), *Las violencias: inclusión creciente*, Bogotá, Facultad de Ciencias

- Humanas y Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad Nacional, 1998.
125. Teófilo Vásquez, "Un ensayo interpretativo sobre la violencia de los actores armados en Colombia". Avance parcial de una investigación en curso, desarrollada por el CINEP, sobre la evolución reciente del conflicto armado.
126. Andrés Peñate, *Arauca: Politics and Oil in a Colombian Province*, Oxford, St. Antony College, University of Oxford, 1991, citado por Echandía, o.c. Este enfoque es recogido luego por el propio Peñate en "El sendero estratégico del ELN: del idealismo guevarista al clientelismo armado", en Malcolm Deas y María Victoria Llorente (comps.), *Reconocer la guerra para construir la paz*, Bogotá, CEREC, Uniandes, Grupo Editorial Norma, 1999.
127. Alejo Vargas, "Una mirada analítica sobre el ELN", *Controversia*, 173, diciembre de 1998.
128. Comisión de Superación de la Violencia, *Pacificar la paz. Lo que no se ha negociado en los acuerdos de paz*, Bogotá, IEPRI (Universidad Nacional), CINEP, Comisión Colombiana de Juristas y CECOIN, 1992.
129. Fabio López de la Roche, "Problemas y retos de los procesos de reinserción. Reflexiones generales apoyadas en el estudio de caso del EPL", en Ricardo Peñaranda y Javier Guerrero (eds.), *De las armas a la política*, Bogotá, Tercer Mundo, IEPRI, Universidad Nacional, 1999.
130. Clara Inés García, "Antioquia en el marco de la guerra y la paz. Transformaciones de la lógica de los actores armados", *Controversia*, 172, julio de 1998.
131. Camilo Echandía, o.c., pp. 37-42.
132. Camilo Echandía, "Expansión territorial de las guerrillas colombianas: geografía, economía y violencia", en Malcolm Deas y María Victoria Llorente (comps.), *Reconocer la guerra para construir la paz*, Bogotá, CEREC, Uniandes, Grupo Editorial Norma, 1999.
133. Jesús Antonio Bejarano (director de investigación), Camilo Echandía, Rodolfo Escobedo y Enrique León Queruz, *Colombia: inseguridad, violencia y desempeño económico en las áreas rurales*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia y FONADE, Fondo financiero de proyectos de desarrollo, 1997, pp. 20-23.
134. Alfredo Rangel, *Colombia: guerra en el fin del siglo*, Bogotá, Tercer Mundo y Uniandes, 1998, pp. 149-151.
135. *Ibidem*, pp. 35-41.
136. Alfredo Rangel, "Las FARC-EP: una mirada actual", en Malcolm Deas y María Victoria Llorente (comps.), *Reconocer la guerra para construir la paz*, Bogotá, CEREC, Uniandes, Grupo Editorial Norma, 1999.
137. Fernando Cubides, "Los paramilitares como agentes organizados de violencia: su dimensión territorial", en Fernando Cubides, Ana Cecilia Olaya y Carlos Miguel Ortiz, *La violencia y el municipio colombiano, 1980-1997*, Bogotá, Facultad de Ciencias Humanas y Centro de Estudios Sociales (CES), Universidad Nacional, 1998.
138. Recogidas por el CINEP y la Fundación Social en *Voces de paz. Propuestas de hombres y mujeres. Colombia 1984-1996*, Bogotá, agosto de 1996.
139. Ingrid Bolívar, "¿Fin de la horrible noche?", *Cien días vistos por el CINEP*, 41, abril-junio de 1998.
140. Francisco Leal Buitrago, "Las utopías de la paz", en Francisco Leal B. (ed.), *Los laberintos de la guerra. Utopías e incertidumbres sobre la paz*, Bogotá, Tercer Mundo y Uniandes, 1999.
141. "Un plan de puertas cerradas. Cambio para construir la Paz", *Cien días vistos por el CINEP*, 43, enero-marzo de 1999.
142. Mauricio García, "La sociedad civil y los procesos de paz en Colombia (1980-1997)". Ponencia presentada en el *Seminario Internacional sobre análisis y perspectivas del conflicto político armado*, Cali, Univalle, 25 de septiembre de 1997.



Fernán González, S.I., *Colombia, una nación fragmentada*, Cuadernos Bakeaz, nº 36, diciembre de 1999.  
© Fernán González, S.I., 1999; © Bakeaz, 1999.

*Las opiniones expresadas en estos trabajos no coinciden necesariamente con las de Bakeaz.*

**Cuadernos Bakeaz** es una publicación monográfica, bimestral, realizada por personas vinculadas a nuestro centro o colaboradores del mismo. Aborda temas relativos a economía de la defensa, políticas de cooperación, educación para la paz, guerras, economía y ecología; e intenta proporcionar a aquellas personas u organizaciones interesadas en estas cuestiones, estudios breves y rigurosos elaborados desde el pensamiento crítico y desde el compromiso con esos problemas.

**Director de la publicación:** Josu Ugarte • **Coordinación técnica:** Blanca Pérez • **Consejo asesor:** Joaquín Arriola, Nicolau Barceló, Anna Bastida, Roberto Bermejo, Jesús Casquette, Xabier Etxeberria, Adolfo Fernández Marugán, Carlos Gómez Gil, Rafael Grasa, Xesús R. Jares, José Carlos Lechado, Arcadi Oliveres, Jesús M<sup>a</sup> Puente, Jorge Riechmann, Pedro Sáez, Antonio Santamaría, Angela da Silva, Ruth Stanley, Carlos Taibo, Fernando Urruticoechea • **Títulos publicados:** 1. Carlos Taibo, *Veinticinco preguntas sobre los conflictos yugoslavos* (ed. revisada); 2. Xabier Etxeberria, *Antirracismo*; 3. Roberto Bermejo, *Equilibrio ecológico, crecimiento y empleo*; 4. Xabier Etxeberria, *Sobre la tolerancia y lo intolerable*; 5. Xabier Etxeberria, *La ética ante la crisis ecológica*; 6. Hans Christoph Binswanger, *Protección del medio ambiente y crecimiento económico*; 7. Carlos Taibo, *El conflicto de Chechenia: una guía de urgencia*; 8. Xesús R. Jares, *Los sustratos teóricos de la educación para la paz*; 9. Juan José Celorio, *La educación para el desarrollo*; 10. Angela da Silva, *Educación antirracista e interculturalidad*; 11. Pedro Sáez, *La educación para la paz en el currículo de la reforma*; 12. Martín Alonso, *Bosnia, la agonía de una esperanza*; 13. Xabier Etxeberria, *Objeción de conciencia e insumisión*; 14. Jörg Huffschmid, *Las consecuencias económicas del desarme*; 15. Jordi Molas, *Industria, tecnología y comercio en la producción militar: el caso español*; 16. Antoni Segura i Mas, *Las dificultades del Plan de Paz para el Sáhara Occidental, 1988-1995*; 17. Jorge Riechmann, *Herramientas para una política ambiental pública*; 18. Joan Roig, *Guinea Ecuatorial: la dictadura enquistada*; 19. Joaquín Arriola, *Centroamérica, entre la desintegración y el ajuste*; 20. Xabier Etxeberria, *Ética de la desobediencia civil*; 21. Jörn Brömmelhörster, *El dividendo de la paz: ¿qué abarcaría este concepto?*; 22. Luis Alfonso Aranguren Gonzalo, *Educación en la reinvencción de la solidaridad*; 23. Helen Groome, *Agricultura y medio ambiente*; 24. Carlos Taibo, *Las repúblicas ex yugoslavas después de Dayton*; 25. Roberto Bermejo, *Globalización y sostenibilidad*; 26. Roberto Bermejo y Álvaro Nebreda, *Conceptos e instrumentos para la sostenibilidad local*; 27. Jordi Roca, *Fiscalidad ambiental y "reforma fiscal ecológica"*; 28. Xabier Etxeberria, *"Lo humano irreductible" de los derechos humanos*; 29. Xesús R. Jares, *Educación y derechos humanos*; 30. Carlos Gómez Gil, *Una lectura crítica de la cooperación española. Lo que nunca nos dicen*; 31. Xabier Etxeberria, *La educación ante la violencia en el País Vasco*; 32. Daniel J. Myers, *Activismo social a través de la red*; 33. Roberto Bermejo, *Realidades y perspectivas del comercio justo*; 34. Carlos Taibo, *Diez preguntas sobre el conflicto de Kosova*; 35. Clara Murguialday, *Mujeres y cooperación: de la invisibilidad a la equidad de género*; 36. Fernán González, S.I., *Colombia, una nación fragmentada* • **Diseño:** Jesús M<sup>a</sup> Juaristi • **Maquetación:** Irune Elguea • **Impresión:** Grafilur • **ISSN:** 1133-9101 • **Depósito legal:** BI-295-94.

**Suscripción anual** (6 números): 1.500 ptas. (2.400 ptas. a partir del 2000) • **Suscripción de apoyo:** 2.250 ptas. (3.600 ptas. a partir del 2000) • **Forma de pago:** Domiciliación bancaria (indique los 20 dígitos correspondientes a entidad bancaria, sucursal, control y c/c.), o transferencia a la c/c. 2095/0365/49/3830626218, de Bilbao Bizkaia Kutxa • **Adquisición de ejemplares sueltos:** estos cuadernos, y otras publicaciones de Bakeaz, se pueden solicitar contra reembolso (350 ptas. de gastos de envío) a la dirección abajo reseñada. Su PVP es de 250 ptas./ej. (400 ptas./ej. a partir del 2000).

**Bakeaz.** Centro de documentación y estudios para la paz y la ecología es una organización no gubernamental, independiente y sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación. Fue fundada en 1992 por personas vinculadas a los medios universitario, pacifista y ecologista vascos. Sus áreas de interés abarcan temas como la militarización de las relaciones internacionales, las políticas de seguridad, la producción y el comercio de armas, la relación teórica entre economía y ecología, las políticas hidrológicas y de gestión del agua, los procesos de Agenda 21 Local, las políticas de cooperación o la educación para la paz y los derechos humanos. Intenta proporcionar criterios para la reflexión y la acción cívica, mediante un conjunto de recursos y actividades: cuenta con una biblioteca especializada; realiza estudios e investigaciones con el concurso de una amplia red de expertos; publica en diversas colecciones de libros y boletines teóricos sus propias investigaciones o las de organizaciones internacionales como el Worldwatch Institute, ICLEI o UNESCO; organiza cursos, seminarios y ciclos de conferencias; asesora a organizaciones, instituciones y medios de comunicación; publica artículos en prensa y revistas especializadas; y participa en seminarios y congresos.

Bakeaz • Avenida Zuberoa, 43 bajo • 48012 Bilbao • Tel.: 94 4213719 • Fax: 94 4216502 • E-mail: [bakeaz@sarenet.es](mailto:bakeaz@sarenet.es)